



Consejo Económico y Social

Distr.
LIMITADA

E/CN.4/1996/L.11/Add.1
19 de abril de 1996

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
52° período de sesiones
Tema 25 del programa

PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION

Relator: Sr. Rajamony VENU

INDICE*

	<u>Página</u>
II. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISION EN SU 52° PERIODO DE SESIONES	4
A. Resoluciones (<u>continuación</u>)	4
1996/21. Medidas adoptadas para combatir las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otros tipos análogos de intolerancia	4
1996/22. Aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones en materia de presentación de informes de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos	8

* El documento E/CN.4/1996/L.10 y sus adiciones contendrán los capítulos del informe relativos a la organización del período de sesiones y a los diversos temas del programa. Las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión, así como los proyectos de resolución y decisión y otras cuestiones sometidas al Consejo Económico y Social, figurarán en el documento E/CN.4/1996/L.11 y en las correspondientes adiciones.

INDICE (continuación)

Página

II. A. (continuación)

1996/23.	Aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones	14
1996/24.	Trata de mujeres y niñas	19
1996/25.	Labor de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías	23
1996/26.	Normas humanitarias mínimas	27
1996/27.	Los derechos humanos y la discapacidad	28
1996/28.	Cuestión de la detención arbitraria	32
1996/29.	Funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados detenidos	36
1996/30.	Cuestión de las desapariciones forzadas	39
1996/31.	Derechos humanos y ciencia forense	45
1996/32.	Los derechos humanos en la administración de justicia, en particular los de los niños y menores detenidos	49
1996/33.	La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	53
1996/34.	La independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados	60
1996/35.	El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales	63
1996/36.	Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción	65

INDICE (continuación)

	<u>Página</u>
II. A. (<u>continuación</u>)	
1996/37. Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	66
1996/38. Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de declaración de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la Asamblea General de 23 de diciembre de 1994 . . .	68
1996/39. Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo	71
1996/40. Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías	74
1996/41. Un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas	78

II. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISION
EN SU 52° PERIODO DE SESIONES

A. Resoluciones (continuación)

1996/21. Medidas adoptadas para combatir las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otros tipos análogos de intolerancia

La Comisión de Derechos Humanos,
Reafirmando su resolución 1995/12, de 24 de febrero de 1995,
Recordando la resolución 50/135 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995,

Recordando asimismo la resolución 1995/4 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de 18 de agosto de 1995,

Teniendo en cuenta la resolución 45/105 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1990, en la que la Asamblea declaró una vez más que todas las formas de racismo y discriminación racial, sobre todo las formas institucionalizadas como el apartheid, o las que se derivan de doctrinas oficiales de superioridad o exclusivismo raciales, se cuentan entre las violaciones más graves de los derechos humanos en el mundo contemporáneo y que se las debe combatir por todos los medios,

Teniendo presentes los resultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, y, en particular, la atención concedida en la Declaración y Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23) a la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia,

Consciente de que el racismo, por ser uno de los fenómenos de exclusivismo que padecen muchas sociedades, exige acciones y cooperación aplicadas resueltamente para su erradicación,

Enterada del informe del Secretario General sobre las medidas para combatir el racismo y la discriminación racial, presentado a la Subcomisión en su 44° período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1992/11),

Tomando nota del informe final sobre la libertad de opinión y de expresión presentado a la Subcomisión en su 44° período de sesiones por los Relatores Especiales Sr. Louis Joinet y Sr. Danilo Türk (E/CN.4/Sub.2/1992/9), en el que los Relatores Especiales recuerdan que, según el derecho internacional, el racismo no es una opinión, sino un delito,

Habiendo examinado el informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (E/CN.4/1996/72 y Add.1),

Tomando nota con pesar de que las adiciones 2, 3 y 4 del informe del Relator Especial no estuvieron disponibles a tiempo para su debido examen,

Observando que las manifestaciones de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia son de mal agüero para la comunidad internacional; que la propaganda racista y la incitación al odio racial se están extendiendo, y que el racismo está adquiriendo formas cada vez más violentas,

Profundamente preocupada porque, a pesar de los sostenidos esfuerzos por eliminarlos, el racismo, la discriminación racial, el antisemitismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, así como los actos de violencia racial, persisten e incluso cobran incremento, revistiendo continuamente nuevas formas, entre ellas la tendencia a establecer políticas basadas en la superioridad o el exclusivismo de tipo racial, religioso, étnico, cultural y nacional,

Consciente de la diferencia fundamental entre, por una parte, el racismo y la discriminación racial en forma de política gubernamental institucionalizada o resultante de doctrinas oficiales de superioridad o exclusivismo raciales y, por otra parte, otras manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia que se producen en sectores de muchas sociedades y son perpetradas por individuos o grupos, algunas de ellas dirigidas contra trabajadores migrantes y sus familias,

Consciente asimismo de que la impunidad en delitos motivados por actitudes racistas y xenófobas contribuye a debilitar el imperio de la ley y tiende a alentar la repetición de tales delitos,

Destacando la importancia de eliminar las crecientes manifestaciones de racismo, discriminación racial y xenofobia que se producen en sectores de muchas sociedades, así como de crear condiciones para fomentar una mayor armonía y tolerancia en el seno de las sociedades,

1. Toma nota del informe presentado por el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otros tipos análogos de intolerancia;

2. Expresa su pleno apoyo y reconocimiento a la labor del Relator Especial y a su continuación;

3. Elogia a los Estados que hasta la fecha han invitado y recibido al Relator Especial, y les invita a que estudien atentamente las recomendaciones incluidas en sus informes, con miras a su posible aplicación;

4. Expresa su profunda preocupación e inequívoca condena de todas las formas de racismo y discriminación racial y de toda violencia racista, inclusive actos conexos de violencia fortuita o indiscriminada;

5. Expresa su profunda preocupación y su repudio ante las manifestaciones de racismo y discriminación racial contra trabajadores migrantes y sus familias y otros grupos vulnerables en muchas sociedades;

6. Condena categóricamente todo papel que desempeñan ciertos medios escritos, audiovisuales o electrónicos incitando a actos de violencia motivados por el odio racial;

7. Apoya los esfuerzos de los gobiernos que adoptan medidas encaminadas a erradicar todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia;

8. Exhorta a todos los gobiernos a que apliquen y hagan cumplir la legislación para evitar que se cometan actos de racismo y discriminación racial;

9. Decide ampliar por tres años el mandato del Relator Especial nombrado para examinar los incidentes de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, cualquier forma de discriminación, entre ellas la discriminación contra negros, árabes y musulmanes, xenofobia, negrofobia, antisemitismo y otros tipos análogos de intolerancia, así como las medidas que adopten los gobiernos para combatirlas, informando al respecto anualmente a la Comisión a partir de su 53º período de sesiones;

10. Pide también al Relator Especial que prosiga su intercambio de pareceres con los diversos mecanismos pertinentes y órganos del sistema de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, con objeto de favorecer su eficacia y su cooperación recíproca;

11. Exhorta a todos los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones no gubernamentales, a que proporcionen información al Relator Especial;

12. Insta a todos los gobiernos a que colaboren plenamente con el Relator Especial a fin de que éste pueda desempeñar cabalmente su mandato;

13. Pide al Relator Especial que utilice en grado máximo todas las fuentes adicionales de información, inclusive visitas a países y evaluación de los medios de comunicación, y que recabe las respuestas de gobiernos respecto de acusaciones que se formulen;

14. Alienta al Relator Especial a que, en estrecha consulta con los gobiernos, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, presente en el futuro recomendaciones sobre la enseñanza de los derechos humanos con el fin de evitar actos conducentes al racismo y a la discriminación racial, la xenofobia y otros tipos análogos de intolerancia;

15. Invita a todos los gobiernos a que, cuando sea posible, adopten medidas para proporcionar asistencia y rehabilitación a las víctimas de actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y otros tipos análogos de intolerancia;

16. Deplora que el Relator Especial haya tropezado de nuevo con dificultades en sus esfuerzos por desempeñar su mandato, por insuficiencia de los necesarios recursos;

17. Decide aplazar el examen de las adiciones 2, 3 y 4 del informe del Relator Especial hasta su 53º período de sesiones;

18. Pide al Secretario General que proporcione sin ninguna demora al Relator Especial toda la asistencia y los recursos necesarios para el desempeño de su mandato a fin de permitirle la presentación de un informe provisional a la Asamblea General en su quincuagésimo primer período de sesiones y de un informe completo a la Comisión en su 53º período de sesiones;

19. Decide continuar el examen de esta cuestión en su 53º período de sesiones en relación con el tema del programa titulado "Aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial", como cuestión de prioridad;

20. Recomienda el siguiente proyecto de decisión al Consejo Económico y Social para su aprobación:

"El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 1996/21, de 19 de abril de 1996, de la Comisión de Derechos Humanos, aprueba la decisión de la Comisión de ampliar por tres años el mandato del Relator Especial nombrado para examinar los incidentes de

formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, cualquier forma de discriminación, entre ellas la discriminación contra negros, árabes y musulmanes, xenofobia, negrofobia, antisemitismo y otros tipos análogos de intolerancia, así como las medidas que adopten los gobiernos para combatirlas, informando al respecto anualmente a la Comisión a partir de su 53º período de sesiones, así como la petición de la Comisión de que el Secretario General proporcione al Relator Especial toda la asistencia y los recursos necesarios para el desempeño de su mandato."

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XII.]

1996/22. Aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones en materia de presentación de informes de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando la resolución 50/170 de la Asamblea General de 22 de diciembre de 1995 y su propia resolución 1995/92 de 8 de marzo de 1995, así como otras resoluciones pertinentes,

Recordando también los párrafos pertinentes de la Declaración y Programa de Acción de Viena,

Acogiendo con beneplácito el llamamiento formulado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para intensificar los esfuerzos por integrar la igualdad de derechos y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en las actividades de las Naciones Unidas a nivel de todo el sistema y abordar esas cuestiones regular y sistemáticamente por intermedio de los órganos y mecanismos competentes y para que los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, entre otros, tomen las medidas correspondientes,

Tomando nota de las recomendaciones propuestas por el grupo de expertos sobre la incorporación de las perspectivas de género en las actividades y programas de derechos humanos de las Naciones Unidas, que se reunió en Ginebra del 3 al 7 de julio de 1995,

Reafirmando que la aplicación plena y efectiva de los instrumentos de las Naciones Unidas de derechos humanos reviste capital importancia para la labor realizada por la Organización, de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, a fin de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Considerando que el funcionamiento eficaz de los órganos establecidos de conformidad con los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas es indispensable para la aplicación plena y efectiva de esos instrumentos,

Consciente de la importancia de la coordinación de las actividades de promoción y protección de los derechos humanos que realizan los órganos y entidades de las Naciones Unidas que actúan en la esfera de los derechos humanos,

Tomando nota con interés de las iniciativas adoptadas por varios órganos creados en virtud de tratados de elaborar medidas, en el marco de sus mandatos, para impedir que se produzcan o se repitan violaciones graves de los derechos humanos,

Recordando las conclusiones y recomendaciones de las cinco reuniones de presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos celebradas desde 1988 hasta 1994,

Recordando asimismo que la Asamblea General, en su resolución 50/170, reafirmó su responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de los órganos creados en virtud de los instrumentos aprobados por la Asamblea General y, a ese respecto, reafirmó además la importancia de:

- a) Velar por la eficacia del proceso de presentación de informes periódicos por los Estados Partes en esos instrumentos;
- b) Obtener recursos financieros, humanos y de información suficientes para superar las dificultades que actualmente obstaculizan el funcionamiento eficaz de esos órganos;
- c) Promover el aumento de la eficacia y la eficiencia mediante una mejor coordinación de las actividades de los órganos de las Naciones Unidas que actúan en la esfera de los derechos humanos, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación y superposición innecesaria de sus mandatos y funciones;
- d) Examinar la cuestión de las obligaciones de presentar informes y la de las consecuencias financieras cada vez que se preparen nuevos instrumentos de derechos humanos;

Teniendo presente que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, tiene la responsabilidad, entre otras, de coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas,

1. Acoge con satisfacción el informe de la sexta reunión de los presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en Ginebra del 18 al 22 de septiembre de 1995 (A/50/505, anexo) y toma nota de sus conclusiones y recomendaciones;

2. Subraya la necesidad de que los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos cuenten con suficientes recursos financieros, de personal y de información para desarrollar sus actividades y, en vista de ello:

a) Reitera su solicitud al Secretario General de que proporcione recursos suficientes a cada uno de los órganos creados en virtud de tratados;

b) Exhorta al Secretario General a que utilice con el máximo de eficiencia los recursos disponibles y a que procure obtener los recursos necesarios para dar a los órganos creados en virtud de tratados suficiente apoyo administrativo, la posibilidad de recurrir al asesoramiento de expertos y acceso a bases de datos apropiadas y servicios de información en línea;

c) Pide al Secretario General que presente un informe sobre esta cuestión a la Comisión de Derechos Humanos en su 53º período de sesiones;

3. Toma nota de los posibles beneficios de la elaboración de un sistema de base de datos y recuperación de información de texto íntegro para el Comité de los Derechos del Niño;

4. Exhorta a los Estados Partes a que notifiquen sin demora al Secretario General, en su calidad de depositario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que aceptan las enmiendas aprobadas por los Estados Partes y por la Asamblea General;

5. Observa con agrado que los órganos creados en virtud de tratados y el Secretario General, en sus respectivas esferas de competencia, siguen tratando de simplificar, racionalizar, hacer más transparentes y mejorar en general los procedimientos de presentación de informes;

6. Insta a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y a sus presidentes en su séptima reunión a que continúen examinando, como cuestión de prioridad, la forma de reducir las duplicaciones en la presentación de los informes exigidos de conformidad con los diferentes instrumentos sin menoscabo de la calidad de los informes y de aliviar en general la carga de la presentación de informes para los Estados Miembros, en particular:

a) Indicando los casos en que, al preparar un informe, se pueden hacer referencias a otros informes;

b) Recomendando, cuando proceda, que se designen dependencias administrativas nacionales encargadas concretamente de coordinar los informes que se presenten a todos los órganos creados en virtud de tratados;

c) Estableciendo una coordinación entre los órganos creados en virtud de tratados y la Organización Internacional del Trabajo a fin de determinar las duplicaciones entre sus respectivos instrumentos y convenios;

d) Considerando la utilidad de informes únicos generales, así como la de sustituir los informes periódicos por informes especialmente preparados e informes por temas;

y a que informen al respecto a la Comisión de Derechos Humanos;

7. Insta a los Estados Partes a que ayuden, en forma individual o por medio de las reuniones de los Estados Partes, a determinar y aplicar medidas para seguir simplificando, racionalizando y mejorando en general los procedimientos de presentación de informes y evitar la duplicación;

8. Pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, de conformidad con su mandato, aliente al experto independiente a concluir su informe provisional (A/CONF.157/PC/62/Add.11/Rev.1) sobre los métodos posibles a largo plazo de aumentar la eficacia del régimen de tratados a tiempo para el informe final que ha de examinar la Comisión de Derechos Humanos en su 53º período de sesiones y pide al Secretario General que, con los recursos existentes, preste al experto independiente toda la asistencia que pueda necesitar;

9. Pide también al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que vele por que el Manual de preparación de informes sobre derechos humanos de las Naciones Unidas (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.91.XIV.1) esté disponible cuanto antes en todos los idiomas oficiales y por que se

preste la debida atención a las recomendaciones que a propósito del Manual hizo la quinta reunión de presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos;

10. Expresa su preocupación por el número cada vez mayor de informes atrasados sobre la aplicación presentados por los Estados Partes en los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y por la tardanza de los órganos respectivos en examinar esos informes, e insta una vez más a los Estados Partes a que hagan todo lo posible por cumplir sus obligaciones de presentación de informes;

11. Invita a los Estados Partes que no han podido cumplir con la obligación de presentar sus informes iniciales a que recurran a la asistencia técnica;

12. Alienta a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en sus esfuerzos por examinar, con arreglo a los procedimientos previstos en sus mandatos para la presentación de informes respecto de los tratados de derechos humanos, los progresos realizados por todos los Estados Partes, sin excepción, en el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de los tratados de derechos humanos;

13. Insta a los Estados Partes a que, en sus próximas reuniones previstas, aborden con carácter prioritario la cuestión de los Estados Partes que incumplen sistemáticamente sus obligaciones de presentar informes;

14. Insta también a todos los Estados Partes cuyos informes han sido examinados por órganos creados en virtud de tratados a que tengan debidamente en cuenta las observaciones y comentarios finales formulados por esos órganos acerca de sus informes;

15. Destaca la utilidad de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica para ayudar a los Estados Partes a cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y con este fin:

a) Invita a los órganos creados en virtud de tratados a seguir dando a conocer las posibilidades de que los Estados Partes se beneficien de esos servicios de asesoramiento y asistencia técnica;

b) Pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, en el cumplimiento de su mandato estipulado en la resolución 48/141 de la Asamblea General, siga prestando servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los

Estados que los soliciten, siempre que sea posible en cooperación con otros organismos pertinentes;

16. Acoge con satisfacción la recomendación de los presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de que esos órganos insten a todos los Estados Partes a que traduzcan, publiquen y difundan ampliamente en sus territorios el texto íntegro de las observaciones finales acerca de los informes que presentan a los órganos de supervisión de tratados, y pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que haga todo lo posible para que los informes recientes y las actas resumidas de los debates de los comités al respecto, así como las observaciones y comentarios finales de los órganos creados en virtud de tratados, sigan estando disponibles en los centros de información de las Naciones Unidas de los países que presentan esos informes;

17. Acoge también con beneplácito la contribución que los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas aportan a la labor de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos e invita a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas y a los órganos creados en virtud de tratados a que intensifiquen la cooperación entre ellos, teniendo presentes las funciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

18. Invita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que, de conformidad con el mandato señalado en la resolución 48/141 de la Asamblea General, consulte a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en sus esfuerzos por fomentar la cooperación con las organizaciones intergubernamentales regionales en la promoción y protección de los derechos humanos;

19. Reconoce la importante función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la aplicación efectiva de todos los instrumentos de derechos humanos, y alienta el intercambio de información fidedigna entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y esas organizaciones;

20. Observa con agrado que los presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos insisten en que esos órganos vigilen de cerca el disfrute de los derechos humanos por la mujer, en el ámbito de la competencia de cada uno de ellos, y recomienda que las directrices para la

presentación de informes adoptadas por cada uno de esos órganos se modifiquen a fin de determinar la información específica por sexos que han de proporcionar los Estados Partes en sus informes;

21. Acoge también con agrado todas las medidas apropiadas que puedan adoptar los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, de acuerdo con sus mandatos, frente a situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos, en particular informando de esas violaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General y a los órganos competentes de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, y pide al Alto Comisionado que, actuando dentro de su mandato, coordine las actividades y celebre consultas a este respecto en todo el sistema de las Naciones Unidas;

22. Pide al Secretario General que presente un informe a la Comisión en su 53º período de sesiones sobre las medidas adoptadas para aplicar la presente resolución y los obstáculos con que se tropieza;

23. Decide examinar esta cuestión con carácter prioritario en su 53º período de sesiones en relación con el tema del programa titulado "Buen funcionamiento de los órganos establecidos en virtud de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas".

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIV.]

1996/23. Aplicación de la Declaración sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o las convicciones

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando que con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas todos los Estados se han comprometido a promover y fomentar el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Reconociendo que esos derechos dimanar de la dignidad inherente a la persona humana,

Destacando que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias tiene profunda significación y amplio alcance y abarca la libertad de pensamiento sobre todos los temas, las convicciones personales y la profesión de una religión o creencia, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas,

Recordando el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reafirmando que la discriminación de los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una afrenta a la dignidad humana y una negación de los Principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando la resolución 36/55 de la Asamblea General, de 25 de noviembre de 1981, por la que se proclamó la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

Tomando nota de la resolución 50/183 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1995, en la que se pedía a la Comisión de Derechos Humanos que siguiera examinando medidas para aplicar la Declaración y se pedía al Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa que presentase un informe provisional a la Asamblea en su quincuagésimo primer período de sesiones,

Reafirmando el llamamiento dirigido por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos a todos los gobiernos con objeto de que adoptaran las medidas adecuadas, de conformidad con sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, para combatir la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones, con inclusión de las prácticas discriminatorias contra la mujer y la profanación de lugares sagrados,

Recordando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirmó el compromiso solemne de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional, y declaró que es incuestionable el carácter universal de estos derechos y libertades,

Tomando nota con preocupación de las medidas y prácticas que en varios países pueden promover la intolerancia, en particular la intolerancia religiosa, en la sociedad,

Teniendo presente la necesidad de que todos los gobiernos cooperen con el Relator Especial sobre la intolerancia religiosa para que pueda cumplir plenamente su mandato y tomando nota a este respecto de la importancia atribuida por el Relator Especial a la necesidad de proseguir el diálogo con los gobiernos, entre otras cosas por medio de visitas a los países,

Celebrando en este contexto el hecho de que varios gobiernos hayan facilitado las visitas del Relator Especial,

Poniendo de relieve que las organizaciones no gubernamentales y los órganos y grupos religiosos de todos los niveles tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la tolerancia y la protección de la libertad de religión o de convicciones,

Consciente de la importancia de la educación para asegurar la tolerancia en materia de religión o de convicciones,

Alarmada por las graves manifestaciones de intolerancia y discriminación y actos de violencia por motivos de religión o convicciones, en particular los actos de violencia, intimidación y coerción motivados por el extremismo religioso, que se producen en muchas partes del mundo y amenazan el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,

Profundamente preocupada porque, según ha informado el Relator Especial, entre los derechos violados por motivos religiosos se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y a seguridad de la persona, el derecho a la libertad de circulación, y el derecho a la libertad de opinión y de expresión,

1. Reafirma que la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias es un derecho humano que dimana de la dignidad inherente al ser humano y que se debe garantizar a todos sin discriminación;

2. Toma nota del informe del Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa (E/CN.4/1996/95 y Add.1 y 2);

3. Toma nota con gran preocupación de la persistencia, señalada por el Relator Especial, de las manifestaciones de odio e intolerancia que incluyen actos de violencia motivados por la intolerancia religiosa que constituyen una amenaza para todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

4. Condena todos esos actos motivados por la intolerancia religiosa en todas sus formas, comprendidas las prácticas con que se violan los derechos humanos de la mujer y se discrimina contra ella;

5. Insta a los Estados a velar por que sus regímenes constitucionales y jurídicos proporcionen a todos, sin discriminación, garantías adecuadas y efectivas de libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias, incluido el establecimiento de recursos eficaces en los casos en que se viole el derecho a la libertad de religión o de creencias;

6. Insta también a los Estados a garantizar, en especial, que nadie que se encuentre bajo su jurisdicción sea privado, por razones de religión o creencias, del derecho a la vida o del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona o sometido a torturas o a detención o arresto arbitrarios;

7. Insta asimismo a todos los Estados a que, de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, adopten todas las medidas apropiadas para combatir el odio, la intolerancia y los actos de violencia, intimidación y coerción motivados por la intolerancia religiosa, y para fomentar la comprensión, la tolerancia y el respeto en lo relativo a la libertad de religión o creencias;

8. Exhorta a los Estados a que promuevan y fomenten la tolerancia en las cuestiones relacionadas con la religión o las creencias y cuiden de que los valores del pluralismo, el respeto de la diversidad religiosa y la no discriminación se promuevan con eficacia mediante la adopción de medidas apropiadas tales como una legislación que no tenga por efecto fomentar la intolerancia y la discriminación en la sociedad;

9. Hace notar que, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, las restricciones a la libertad de manifestar la religión o las creencias sólo se permiten si dichas restricciones están prescritas por la ley, son necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás, y se aplican de modo que no atenten contra el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;

10. Insta a los Estados a velar por que, en el desempeño de sus funciones oficiales, los funcionarios de las fuerzas del orden público y de la administración pública, los educadores y demás funcionarios públicos respeten las diferentes religiones y creencias y no discriminen contra las personas que profesan otras religiones o creencias;

11. Exhorta a todos los Estados a que, de conformidad con lo establecido en la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, reconozcan el derecho de todas las personas a practicar el culto o a reunirse en relación con la religión o las convicciones y a fundar y mantener lugares para esos fines;

12. Expresa su profunda preocupación por los ataques contra santuarios y lugares sagrados y exhorta a todos los Estados a que, de conformidad con su legislación nacional y con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, se esfuercen al máximo por garantizar el pleno respeto y protección de dichos santuarios y lugares sagrados;

13. Considera conveniente intensificar las actividades de promoción y de información pública de las Naciones Unidas en cuestiones relativas a la libertad de religión o de creencias y garantizar que se adopten medidas apropiadas para tal fin, entre ellas la difusión, como cuestión de alta prioridad, del texto de la Declaración por parte de los centros de información de las Naciones Unidas y de otros órganos interesados;

14. Alienta la prosecución de los esfuerzos del Relator Especial para examinar los incidentes y las acciones de los gobiernos en todas partes del mundo que sean incompatibles con las disposiciones de la Declaración y para recomendar medidas correctivas, según proceda;

15. Subraya la necesidad de que el Relator Especial, al preparar sus informes, incluso al reunir información y formular recomendaciones, tenga en cuenta las disparidades entre el hombre y la mujer;

16. Invita al Relator Especial a que, de conformidad con su mandato y en el contexto de las recomendaciones de medidas correctivas, tome en cuenta la experiencia de diversos Estados en cuanto a determinar qué medidas son más eficaces para promover la libertad de religión y de creencias y combatir todas las formas de intolerancia;

17. Alienta a los gobiernos a cooperar con el Relator Especial para que pueda desempeñar su cometido con mayor eficacia, en particular respondiendo a las solicitudes de observaciones y comentarios y considerando seriamente la posibilidad de invitarlo a visitar sus países;

18. Invita al Relator Especial a que, en el desempeño de su mandato, siga teniendo presente la necesidad de poder responder eficazmente a la información fidedigna que llegue a su conocimiento, que solicite las observaciones y opiniones del gobierno interesado respecto de cualquier información que se proponga incluir en su informe y que siga realizando su labor con discreción e independencia;

19. Alienta a los gobiernos a que, cuando recurran a la ayuda del programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, consideren, si procede, la posibilidad de incluir solicitudes de asistencia en materia de promoción y protección del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;

20. Acoge complacida y alienta los esfuerzos desplegados por las organizaciones no gubernamentales para promover la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, y las invita a considerar la posibilidad de hacer nuevas contribuciones con miras a su aplicación y difusión en todas las partes del mundo;

21. Pide al Secretario General que proporcione al Relator Especial toda la asistencia necesaria para que pueda desempeñar su mandato, presentar un informe provisional a la Asamblea General en su quincuagésimo primer período de sesiones e informar a la Comisión en su 53º período de sesiones;

22. Decide seguir examinando esta cuestión en su 53º período de sesiones en relación con el tema titulado "Aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones".

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/24. Trata de mujeres y niñas

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los Pactos internacionales de derechos

humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,

Recordando que en la Declaración y Programa de Acción de Viena que aprobó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 se afirmó que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales,

Acogiendo con beneplácito el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994, en el que, entre otras cosas, se pide a todos los gobiernos que impidan la trata internacional de migrantes, especialmente con fines de prostitución, y a los gobiernos de los países de acogida y los países de origen que apliquen sanciones eficaces contra quienes organizan la migración de indocumentados, explotan a esos migrantes o se dedican a esa trata, en especial a cualquier forma de trata internacional de mujeres y niños,

Recordando también que en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, se reconoció el peligro que representa para la sociedad la trata de mujeres y niños,

Acogiendo también con beneplácito las iniciativas adoptadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en El Cairo del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, a los efectos de que el tráfico clandestino de migrantes indocumentados constituya delito,

Haciendo suya la conclusión de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, de que la eliminación efectiva de la trata de mujeres y niñas para el comercio sexual es un problema internacional urgente,

Recordando su resolución 1995/25, de 3 de marzo de 1995, la resolución 50/167 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1995, y las resoluciones 39/6, de 29 de marzo de 1995, y 40/4, de 22 de marzo de 1996, de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,

Reconociendo la labor realizada por las organizaciones intergubernamentales, como la Organización Internacional para las Migraciones, y las organizaciones no gubernamentales en lo que respecta a reunir información sobre la magnitud y la complejidad del problema de la trata, proporcionar refugios a las mujeres y los niños víctimas de trata y proceder a su repatriación voluntaria a los países de origen,

Observando con preocupación el número cada vez mayor de mujeres y niñas procedentes de los países en desarrollo y de algunos países con economías en transición que son víctimas de los tratantes, y reconociendo que el problema de la trata afecta también a adolescentes varones,

Convencida de la necesidad de eliminar todas las formas de violencia y explotación sexual y trata de mujeres, incluida la prostitución y otras formas de comercio sexual, que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano,

Consciente de la urgente necesidad de que se adopten medidas eficaces en los planos nacional, regional e internacional con objeto de proteger a las mujeres y a las niñas de esta trata infame,

1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre la trata de mujeres y niñas (A/50/369);

2. Insta a los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de destino y a las organizaciones regionales e internacionales, según proceda, a hacer lo siguiente para aplicar la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer:

a) Considerar la posibilidad de ratificar y aplicar las convenciones internacionales sobre la trata de personas y sobre la esclavitud;

b) Tomar medidas adecuadas para abordar las causas fundamentales, incluidos los factores externos, que promueven la trata de mujeres y niñas con fines de prostitución y otras formas de comercio sexual, matrimonios forzados y trabajos forzados, con el objeto de eliminar la trata de mujeres, entre ellas las encaminadas a fortalecer las leyes vigentes para mejorar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas y castigar a los autores por las vías civil y penal;

c) Intensificar la cooperación y la acción concertada de todas las autoridades e instituciones pertinentes encargadas de hacer cumplir la ley con miras a dismantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de trata;

d) Asignar recursos para ofrecer programas amplios diseñados para rehabilitar y reinserter en la sociedad a las víctimas de la trata, entre otras cosas mediante la formación profesional, la asistencia jurídica y la asistencia sanitaria confidencial, y adoptar medidas para cooperar con las organizaciones no gubernamentales a fin de prestar atención social, médica y psicológica a las víctimas de la trata;

e) Elaborar programas y políticas de educación y capacitación y considerar la posibilidad de promulgar leyes encaminadas a prevenir el turismo sexual y la trata, haciendo especial hincapié en la protección de las mujeres jóvenes y las niñas;

3. Invita a los gobiernos a que otorguen a las víctimas de la trata de personas un trato humanitario uniforme mínimo que sea congruente con las normas de derechos humanos;

4. Invita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que, al ocuparse de los obstáculos que impiden la realización de los derechos humanos de las mujeres, en particular en sus entrevistas con la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la prevención de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, incluya la trata de mujeres y niñas entre sus asuntos prioritarios;

5. Alienta al Centro de Derechos Humanos a que incluya la cuestión de la trata de mujeres y niñas en su programa de trabajo en el marco de sus actividades de información, capacitación y asesoramiento, con miras a proporcionar a los gobiernos que la soliciten asistencia en el establecimiento de medidas preventivas contra la trata de personas mediante actividades de educación y campañas de información apropiadas;

6. Pide a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que aliente a su Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud a que continúe ocupándose de la cuestión de la trata de mujeres y niñas en el contexto de la preparación del proyecto de programa de acción sobre la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena;

7. Invita a las organizaciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales pertinentes a que proporcionen a los gobiernos que lo soliciten servicios de asesoramiento para la planificación y el establecimiento de programas de rehabilitación para las víctimas de la trata de personas y para la capacitación, particularmente la capacitación en materia de derechos humanos del personal que participará directamente en la aplicación de esos programas;

8. Pide al Secretario General que le facilite, en su 53º período de sesiones, el informe sobre la aplicación de la resolución 50/167 de la Asamblea General que deberá presentar a ésta en su quincuagésimo primer período de sesiones;

9. Decide proseguir el examen de la cuestión en su 53º período de sesiones en relación con el tema del programa pertinente.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XV.]

1996/25. Labor de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando su resolución 1995/26, de 3 de marzo de 1995,

Recordando el mandato de la Subcomisión según lo definió la Comisión y las responsabilidades especiales que le incumben, en particular, en virtud de las resoluciones 8 (XXIII) de 16 de marzo de 1967 y 17 (XXXVII) de 10 de marzo de 1981 de la Comisión, 1235 (XLII) de 6 de junio de 1967 y 1503 (XLVIII) de 27 de mayo de 1970 del Consejo Económico y Social y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General,

Recordando también su resolución 1992/66 de 4 de marzo de 1992, en la que formuló ciertas directrices para la labor de la Subcomisión, y la resolución 1991/32 del Consejo Económico y Social de 31 de mayo de 1991, sobre el fortalecimiento de la independencia de los expertos miembros de la Subcomisión,

Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1994/3) y de la decisión 1994/117 de la Subcomisión, de 26 de agosto de 1994,

Tomando nota también de los informes de la Subcomisión y de su Presidente sobre el 47º período de sesiones (E/CN.4/1996/2-E/CN.4/Sub.2/1995/51 y E/CN.4/1996/81),

Expresando su reconocimiento por la contribución positiva que la Subcomisión aporta a la labor de la Comisión en la promoción y protección de los derechos humanos,

Convencida de que la Subcomisión, como órgano de expertos independientes, tiene un importante papel complementario que desempeñar para prestar asesoramiento a la Comisión de Derechos Humanos, entre otras cosas con respecto a las violaciones de los derechos humanos y a los nuevos acontecimientos en la esfera de los derechos humanos,

Teniendo presente que la Subcomisión también ofrece un foro para las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social y que éstas pueden efectuar importantes contribuciones a la labor de la Subcomisión, de conformidad con los principios consagrados en la resolución 1296 (XLIV) del Consejo, de 23 de mayo de 1968,

Convencida de que la imparcialidad y objetividad de la Subcomisión y la independencia de sus miembros y de sus suplentes son esenciales para su credibilidad y eficacia,

Plenamente consciente de que la credibilidad y eficacia de la Subcomisión como órgano de expertos de derechos humanos dependen fundamentalmente de que los gobiernos designen y la Comisión elija como miembros y suplentes de la Subcomisión sólo a personas que posean verdadera experiencia en la esfera de los derechos humanos y que puedan actuar con independencia de sus gobiernos y dedicar el tiempo necesario a su mandato,

Convencida de que los estudios encargados por el Consejo Económico y Social a miembros de la Subcomisión deberían ser realizados por los miembros de la Subcomisión o por sus suplentes, en cooperación con sus consultores, en caso necesario, y con la Secretaría, y de que esos estudios deben ser objeto de un examen exhaustivo y de un seguimiento apropiado,

Tomando nota con reconocimiento del diálogo que mantiene la Subcomisión con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y de la necesidad de que se prepare a fondo esa interacción,

Destacando la necesidad de una mayor cooperación entre la Comisión y la Subcomisión y recordando que sigue siendo importante que la Comisión oriente a la Subcomisión, y que ésta siga esa orientación teniendo en cuenta el mandato que se le ha encomendado, para garantizar la complementariedad y evitar las duplicaciones,

1. Reitera que la mejor manera de que la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías preste asistencia a la Comisión es presentarle recomendaciones basadas en las diferentes opiniones e impresiones de expertos independientes, que deben reflejarse de manera apropiada en los informes de la Subcomisión, así como en los estudios de los expertos preparados bajo sus auspicios;

2. Exhorta a los Estados a que designen como miembros y suplentes a personas que satisfagan los criterios de expertos independientes, para que desempeñen en esa calidad sus funciones de miembros de la Subcomisión, y a que respeten plenamente la independencia de los miembros y suplentes elegidos;

3. Pide a los Estados que designen candidatos para la Subcomisión, y al Secretario General, que den a conocer las candidaturas con tiempo suficiente para que los miembros de la Comisión puedan evaluar a fondo la idoneidad de los candidatos;

4. Reafirma que una de las tareas de la Subcomisión es emprender un examen exhaustivo de la información relativa a presuntas violaciones de los derechos humanos, de conformidad con su mandato, así como la presentación de los resultados del examen a la Comisión;

5. Invita a la Subcomisión a que siga teniendo debidamente en cuenta los nuevos acontecimientos en la esfera de los derechos humanos;

6. Insta a la Subcomisión a que, en el desempeño de sus funciones y deberes, observe las resoluciones y decisiones de la Comisión y del Consejo Económico y Social relativas a su labor;

7. Toma nota de la decisión 1995/113 de la Subcomisión, de 24 de agosto de 1995, de continuar su práctica de examinar el tema 6 de su programa, titulado "Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes", comenzando el día siguiente a la

aprobación del programa, y acoge con satisfacción la decisión 1995/115 de la Subcomisión, de 24 de agosto de 1995, de estudiar en su 48º período de sesiones la mejor forma de desempeñar su mandato con respecto al examen de las violaciones de los derechos humanos en el marco de este tema del programa;

8. Toma nota también de la decisión 1995/12 de la Subcomisión, de 24 de agosto de 1995, de adoptar, a título experimental, nuevos procedimientos con arreglo a los cuales el derecho de respuesta sólo podrá ejercerse al finalizar el debate sobre cada tema del programa y las denuncias de las violaciones de los derechos humanos que se formulen en relación con el tema 6 no podrán ser reiteradas en el marco de otro tema del programa;

9. Pide a la Subcomisión que examine de manera exhaustiva y eficaz su mandato y sus métodos de trabajo con miras a seguir mejorando su eficiencia y a evitar duplicaciones de la labor de la Comisión y sus mecanismos y que, en ese contexto, teniendo en cuenta las opiniones de los Estados Miembros, dedique especial atención a lo siguiente:

- a) La mayor racionalización de su programa;
- b) La selección de temas de los estudios, así como el encargo, el número, el tratamiento y el marco cronológico de los estudios e informes;
- c) El funcionamiento y el mandato de sus mecanismos;
- d) La necesidad de concentrar la atención en la aplicación de las normas y mecanismos de derechos humanos existentes;
- e) El examen de presuntas violaciones de los derechos humanos;
- f) La necesidad de mejorar la cooperación con los mecanismos de la Comisión y, en el marco de sus competencias respectivas, con todos los órganos pertinentes, incluso los órganos creados en virtud de tratados sobre los derechos humanos; y
- g) La composición de la Subcomisión y los requisitos para ser miembro de ella;

10. Toma nota de la decisión 1995/114 de la Subcomisión, de 24 de agosto de 1995, de asignar parte de su 48º período de sesiones a un intercambio privado de opiniones entre los expertos y sus suplentes, y pide a la Subcomisión que dedique una parte de esas sesiones privadas a considerar el examen de su mandato y de sus métodos de trabajo;

11. Decide examinar el informe de la Subcomisión sobre esa cuestión en su 53º período de sesiones, en el contexto del examen del mandato y los métodos de trabajo de la Subcomisión;

12. Pide al Secretario General que siga prestando su firme apoyo a la Subcomisión y, en particular, que vele por que los documentos de la Subcomisión estén disponibles en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas con tiempo suficiente antes del período de sesiones;

13. Invita al Presidente de la Comisión a informar a la Subcomisión acerca del debate en relación con este tema;

14. Pide al Presidente de la Subcomisión en su 48º período de sesiones que informe a la Comisión en su 53º período de sesiones sobre los aspectos importantes de la labor de la Subcomisión.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XV.]

1996/26. Normas humanitarias mínimas

La Comisión de Derechos Humanos,

Gravemente preocupada por las numerosas situaciones en que la violencia interna provoca graves sufrimientos e infracciones de los principios humanitarios y socava la protección de los derechos humanos,

Gravemente preocupada también por la conducta de grupos y personas que recurren a la violencia, contribuyendo con ello al sufrimiento de las personas inocentes en tales situaciones,

Consciente de la conveniencia de reafirmar los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública, que rigen la conducta de todas las personas, grupos y autoridades públicas en todas las situaciones,

Poniendo de relieve a este respecto la necesidad de definir y aplicar medidas destinadas a prevenir los abusos y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular del derecho a la vida y a la integridad de la persona,

Tomando nota de la resolución 1994/26 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de 26 de agosto de 1994, y de su propia resolución 1995/29, de 3 de marzo de 1995,

1. Reconoce la necesidad de elaborar principios aplicables a las situaciones de violencias y disturbios internos de toda índole, que sean compatibles con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas;

2. Reconoce asimismo la importancia que tiene a este respecto que en cada país exista legislación nacional apropiada para hacer frente a tales situaciones de manera acorde con el imperio de la ley;

3. Invita a todos los Estados a que consideren la posibilidad de revisar su legislación nacional aplicable a las situaciones de emergencia pública para asegurarse de que se ajusta a los requisitos del imperio de la ley y de que no comporta discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social;

4. Acoge con satisfacción el ofrecimiento de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia de organizar, en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, un seminario al que se invitará a expertos gubernamentales y no gubernamentales de todas las regiones para estudiar esta cuestión y facilitar las conclusiones del seminario para su difusión a los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales;

5. Pide al Secretario General que transmita el texto de la presente resolución a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que hagan observaciones sobre este asunto para su presentación a la Comisión de Derechos Humanos en su 53º período de sesiones.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XV.]

1996/27. Los derechos humanos y la discapacidad

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente la promesa formulada por los Estados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de proceder conjunta y separadamente, en colaboración con las Naciones Unidas, para mejorar la calidad de la vida y lograr el pleno empleo y condiciones de progreso y desarrollo económico y social,

Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño,

Acogiendo con satisfacción la reafirmación sin reservas en la Declaración y Programa de Acción de Viena de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y el reconocimiento en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de la necesidad apremiante de seguir promoviendo, entre otras cosas, la realización de los objetivos de participación e igualdad plenas para las personas con discapacidad, así como el reconocimiento de las necesidades especiales de las mujeres con discapacidad por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995,

Recordando la resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, en la que la Asamblea aprobó las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,

Reafirmando la validez y valor permanentes del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de sesiones, que constituye un marco sólido e innovador para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad,

Destacando nuevamente la responsabilidad de los gobiernos de eliminar o facilitar la eliminación, en la medida de lo posible, de las barreras y obstáculos que se oponen a la plena integración y participación en la sociedad de las personas con discapacidad, y apoyando los esfuerzos de los gobiernos por formular políticas nacionales para alcanzar objetivos concretos a ese respecto,

Reconociendo la contribución de las organizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en el esfuerzo mundial por lograr la participación e igualdad plena de las personas con discapacidad y garantizar el pleno goce de los derechos humanos por las personas con discapacidad,

Tomando nota de los informes del Sr. Leandro Despouy, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y de la publicación del Centro de Derechos Humanos titulada Los derechos humanos y las personas con discapacidad en los que se propone la creación de

un mecanismo internacional, como un ombudsman, para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad,

Preocupada por la amplitud de las discapacidades causadas por la utilización indiscriminada de minas antipersonales, especialmente entre las poblaciones civiles,

1. Exhorta al Secretario General a que mantenga la integridad de los programas del sistema de las Naciones Unidas relativos a las personas con discapacidad, incluido el Fondo Voluntario del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, con objeto de promover los derechos y la equiparación de oportunidades y la plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad;

2. Se congratula de la labor realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para señalar las recomendaciones del Relator Especial del Comité de Desarrollo Social encargado de la cuestión de las personas con discapacidad y exhorta a los Estados a que cooperen plenamente con el Relator Especial, que satisfagan sus solicitudes de información y proporcionen datos pertinentes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

3. Insta a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a que aporten la información pertinente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Centro de Derechos Humanos;

4. Alienta a todos los órganos encargados de supervisar tratados de derechos humanos a que respondan afirmativamente a la invitación de vigilar el cumplimiento por los Estados de los compromisos contraídos en virtud de los correspondientes instrumentos de derechos humanos a fin de que las personas con discapacidad disfruten plenamente de estos derechos;

5. Insta a todos los gobiernos a que, con la cooperación y asistencia de organizaciones, apliquen las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad;

6. Invita a los gobiernos y al sector privado a que contribuyan al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los Impedidos, con miras a proporcionar apoyo adicional para la aplicación de las Normas Uniformes, en el contexto del Programa de Acción Mundial para los Impedidos;

7. Pide al Secretario General que facilite el apoyo adecuado para el funcionamiento eficaz de la estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 y años posteriores;

8. Alienta al Secretario General y a los organismos interesados de las Naciones Unidas a que, en consulta con los Estados Miembros, terminen de elaborar un indicador mundial de discapacidad en la Comisión de Desarrollo Social y alienta también al Relator Especial y a todos los organismos encargados de supervisar tratados de derechos humanos a que lo utilicen, cuando sea adecuado, en su labor futura;

9. Expresa grave preocupación porque las situaciones de conflicto armado tienen consecuencias especialmente devastadoras para los derechos humanos de las personas con discapacidad;

10. Expresa profunda preocupación por la utilización indiscriminada de minas antipersonales que provocan un gran número de discapacidades en las poblaciones civiles de todos los continentes, en especial entre mujeres y niños, y exhorta a todos los gobiernos y organismos de las Naciones Unidas a que presten su asistencia para aliviar los sufrimientos de estas víctimas;

11. Acoge con satisfacción las iniciativas internacionales encaminadas a restringir y prohibir la utilización de minas antipersonales y exhorta a los gobiernos a que contribuyan a los trabajos de desminado, lo que reducirá el número de discapacidades causadas por estas armas;

12. Pide al Secretario General que informe bienalmente a la Asamblea General de los progresos que se hayan realizado para lograr el pleno reconocimiento y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

13. Pide también al Secretario General que ponga a disposición de la Comisión en su 53º período de sesiones el último informe del Relator Especial del Comité de Desarrollo Social encargado de la cuestión de las personas con discapacidad sobre su labor de vigilancia de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad;

14. Reafirma su compromiso de lograr que los derechos de las personas con discapacidad y el interés de esas personas en participar plenamente en los asuntos de la comunidad se sigan teniendo en cuenta en todas sus actividades;

15. Decide seguir examinando la cuestión en su 53º período de sesiones en relación con el tema del programa titulado "Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XV.]

1996/28. Cuestión de la detención arbitraria

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando su resolución 1985/16, de 11 de marzo de 1985, en la que pidió a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que analizara la información de que se disponía acerca de la práctica de la detención administrativa sin acusación o juicio y que formulara recomendaciones sobre la utilización de esa práctica,

Reafirmando los artículos 3, 9, 10 y 29 y las demás disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Recordando los artículos 9, 10, 11 y 14 a 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tomado nota, en su 47º período de sesiones, del informe revisado del Sr. Louis Joinet sobre la práctica de la detención administrativa (E/CN.4/Sub.2/1990/29 y Add.1) y de las recomendaciones formuladas en él,

Recordando sus resoluciones 1991/42, de 5 de marzo de 1991, 1992/28, de 28 de febrero de 1992, 1993/36, de 5 de marzo de 1993, 1994/32, de 4 de marzo de 1994 y 1995/59, de 7 de marzo de 1995,

Teniendo presente que, de conformidad con la resolución 1991/42, la tarea del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria consiste en investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente o que por alguna otra circunstancia sea incompatible con las normas internacionales pertinentes enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados,

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1996/40 y Add.1),

Habiendo escuchado las observaciones hechas en el 52º período de sesiones de la Comisión,

1. Toma nota de la labor desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de los esfuerzos que despliega con miras a revisar sus métodos de trabajo y destaca las iniciativas que ha adoptado para fortalecer la cooperación y el diálogo con los Estados y la búsqueda de la cooperación con todos los interesados en los casos sometidos a su examen, de conformidad con su mandato;

2. Toma nota asimismo del informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1996/40 y Add.1);

3. Pide al Grupo de Trabajo que, en el desempeño de su mandato, siga recabando y reuniendo información de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como de las personas interesadas, de sus familias o sus representantes legales;

4. Pide también al Grupo de Trabajo, que, con arreglo a la resolución 1991/42, tiene el cometido de investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente o que por alguna otra circunstancia sea incompatible con las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, que tome debidamente en cuenta la distinción entre "detención" y "prisión" tal como se indica, entre otros textos, en la resolución 43/173 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988, y que presente a la Comisión, en su 53º período de sesiones, sus conclusiones y recomendaciones al respecto;

5. Pide además al Grupo de Trabajo que, en cumplimiento de su mandato, aplique los tratados pertinentes al caso objeto de examen sólo a los Estados que sean Partes en esos tratados;

6. Invita al Grupo de Trabajo a que tenga en cuenta la necesidad de realizar su tarea, en el marco de su mandato, con discreción, objetividad, imparcialidad e independencia e invita a los expertos a que continúen desempeñando su tarea con rigor, habida cuenta del carácter sumamente concreto de su mandato que consiste principalmente en investigar casos y responder de manera efectiva a la información creíble y fidedigna que reciban;

7. Subraya la necesidad de que en sus informes, incluidas la recogida de información y la formulación de recomendaciones, el Grupo de Trabajo tome en cuenta las diferencias entre ambos sexos;

8. Toma nota, en este contexto, de la importancia que el Grupo de Trabajo atribuye a la coordinación con los demás mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos y con los órganos de vigilancia de tratados, así como al fortalecimiento del cometido del Centro de Derechos Humanos en esta coordinación, y le alienta a que siga evitando las duplicaciones innecesarias;

9. Expresa su profundo agradecimiento a los gobiernos que han cooperado con el Grupo de Trabajo y respondido a sus solicitudes de información, y pide a todos los gobiernos interesados que manifiesten el mismo espíritu de cooperación;

10. Celebra que el Grupo de Trabajo haya sido informado de la liberación de numerosas personas cuya situación se había señalado a su atención;

11. Pide a los gobiernos interesados que presten la atención necesaria a los "llamamientos urgentes" que les haga el Grupo de Trabajo sobre una base estrictamente humanitaria y sin prejuzgar el carácter de la detención;

12. Invita a los gobiernos interesados a que tomen nota de las decisiones del Grupo de Trabajo, a que adopten, llegado el caso, las medidas apropiadas y a que informen al Grupo de Trabajo, de las medidas que hayan adoptado;

13. Alienta a los gobiernos a que presten atención a las recomendaciones del Grupo de Trabajo en lo relativo a las personas mencionadas en su informe que están detenidas desde hace años;

14. Lamenta que el Grupo de Trabajo, pese a la invitación que se le ha formulado, no haya podido efectuar la misión sobre el terreno prevista para el año 1995, y alienta a todos los gobiernos a que inviten al Grupo de Trabajo a acudir a sus países para que pueda cumplir su mandato de forma aún más eficaz;

15. Expresa su preocupación porque, según los datos del Grupo de Trabajo, los casos más frecuentes de privación arbitraria de libertad están motivados por el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y recuerda la necesidad de prestar la debida atención a los casos de detención arbitraria que son resultado de la violación de otros derechos humanos y libertades fundamentales;

16. Toma nota con preocupación de que, según el Grupo de Trabajo, la práctica de la detención arbitraria se ve facilitada y agravada por

varios factores, como el abuso de los estados de excepción, el ejercicio de facultades propias del estado de excepción sin que medie una declaración oficial del estado de excepción, la inobservancia del principio de que debe haber una proporción entre la gravedad de las medidas adoptadas y la situación de que se trata, una definición demasiado vaga de los delitos contra la seguridad del Estado y la existencia de jurisdicciones especiales o de excepción;

17. Alienta a los Estados a que se esfuercen por adoptar las medidas necesarias para garantizar que su legislación en esas esferas concuerda con los instrumentos internacionales pertinentes y a no prolongar los estados de excepción más allá de lo que la situación exige estrictamente, o a limitar sus efectos;

18. Pide al Secretario General y al Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías encargado de examinar la cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción que preste asistencia a los gobiernos que la soliciten, así como a los relatores especiales y al Grupo de Trabajo, para asegurar la promoción y la observancia de las garantías previstas respecto de las situaciones excepcionales en los instrumentos internacionales pertinentes;

19. Pide asimismo al Secretario General que vele por que el Grupo de Trabajo reciba toda la asistencia necesaria, en particular el personal y los recursos necesarios para el desempeño de su mandato, sobre todo en lo que respecta a las misiones sobre el terreno;

20. Pide al Grupo de Trabajo que le presente un informe, en su 53º período de sesiones, y que le haga todas las sugerencias y recomendaciones que le permitirían cumplir mejor su misión, en cooperación con los gobiernos, y que prosiga sus consultas con este fin en el marco de su mandato;

21. Decide continuar el examen de la cuestión en su 52º período de sesiones, en relación con el tema del programa titulado "Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión".

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/29. Funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados detenidos

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 42/219 de 21 de diciembre de 1987, 43/225 de 21 de diciembre de 1988, 44/186 de 19 de diciembre de 1989 y 45/240 de 21 de diciembre de 1990, en las que la Asamblea General deploró que el aumento del número de casos en que la actuación, la seguridad y el bienestar de los funcionarios se han visto adversamente afectados, incluso casos de detención en Estados Miembros y de secuestro por grupos e individuos armados, así como también el aumento del número de casos en que se han puesto en peligro la vida y el bienestar de funcionarios durante el desempeño de sus cometidos oficiales,

Recordando su resolución 1995/39 de 3 de marzo de 1995, en la que pidió al Secretario General que presentara a la Comisión, en su 52º período de sesiones, una versión actualizada del informe sobre la situación de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas, y de sus familias, que se encuentren detenidos, encarcelados, desaparecidos o retenidos en un país contra su voluntad,

Consciente de la necesidad de reforzar los oportunos instrumentos jurídicos internacionales,

Acogiendo complacida la aprobación por la Asamblea General, en su resolución 49/59 de diciembre de 1994, de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado como paso importante para la protección de los funcionarios de las Naciones Unidas que actúan y otras personas bajo su autoridad,

Observando que, desde su adopción, la Convención ha sido firmada únicamente por 40 Estados Miembros y ratificada por 4,

Considerando que, en un momento en que las Naciones Unidas están asumiendo mayores responsabilidades enviando misiones en condiciones difíciles a diversas partes del mundo, es imperativo que sus funcionarios y otras personas que actúan bajo su autoridad puedan desempeñar su cometido con la garantía de que sus derechos humanos y sus privilegios e inmunidades serán plenamente respetados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales,

Visto el informe actualizado del Secretario General sobre detención de funcionarios internacionales y de sus familias (E/CN.4/1996/32 y Add.1),

Tomando nota de las observaciones hechas por determinados órganos, según se menciona en el informe actualizado del Secretario General, de que la cobertura ofrecida por la Convención no incluye a todos los miembros de las misiones de las Naciones Unidas sin distinción del tipo de mandato que han recibido,

Gravemente preocupada por el hecho de que un número considerable de funcionarios y expertos al servicio de las Naciones Unidas, y miembros de sus familias, sigan detenidos, encarcelados, retenidos como rehenes, desaparecidos o retenidos en un país contra su voluntad,

Gravemente preocupada asimismo por el hecho de que un número considerable de funcionarios de las Naciones Unidas, de contratación nacional o internacional, y otras personas que actúan bajo la autoridad de las Naciones Unidas, así como sus familias, han resultado muertas desde julio de 1994,

Tomando nota de la necesidad permanente de una información actualizada y completa sobre la situación de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas, y de sus familias, que se encuentran detenidos, encarcelados, mantenidos como rehenes, desaparecidos o retenidos en un país contra su voluntad,

Persuadida de que un sistema de presentación de informes mejor coordinado y más detallado, con un mejor diálogo entre las Naciones Unidas y el país anfitrión de que se trate, puede contribuir a una solución más rápida de los casos,

Profundamente preocupada por las demoras excesivas y los obstáculos a que hacen frente las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cuando tratan de ejercer plenamente el derecho a la protección funcional de su personal,

Agradeciendo vivamente los esfuerzos desplegados por el Secretario General con el fin de promover una solución satisfactoria para todos los casos de esta clase, y tomando nota de que esos esfuerzos han producido ya resultados concretos en cuanto a la seguridad de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y de sus familias,

1. Toma nota con interés del informe actualizado del Secretario General (E/CN.4/1996/32 y Add.1);

2. Invita al Secretario General a que pida a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas que le sometan sus pareceres y comentarios acerca de las recomendaciones incluidas en el informe definitivo de la Relatora Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías sobre la protección de los derechos humanos de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y de sus familias (E/CN.4/Sub.2/1992/19), y a que presente un informe en el que evalúe las medidas propuestas para la aplicación efectiva de esas recomendaciones;

3. Hace un nuevo llamamiento a los Estados Miembros para que respeten y garanticen el respeto de los derechos de los funcionarios y de otras personas que actúan bajo la autoridad de las Naciones Unidas y de sus familias, y adopten las disposiciones necesarias para garantizar la protección del personal de las Naciones Unidas y el personal conexo en su territorio;

4. Pide al Secretario General que continúe sus esfuerzos para garantizar que los derechos humanos, los privilegios y las inmunidades de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas, y de sus familias, se respeten plenamente y para recabar reparación e indemnización por los perjuicios que les ocasionen cuando se violen sus derechos humanos, privilegios e inmunidades, así como para lograr su plena reincorporación;

5. Reitera las obligaciones que incumben a los Estados Miembros en virtud de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados en cuanto respecta al procesamiento jurídico y al arresto o detención personal;

6. Insta a los Estados Miembros a que:

a) Suministren información oportuna y rápida acerca del arresto o la detención de funcionarios o expertos de las Naciones Unidas y de sus familias;

b) Permitan al representante de la organización internacional competente el acceso inmediato a esas personas;

c) Permitan que equipos médicos independientes investiguen la salud de los funcionarios o expertos detenidos, o de sus familias, y les presten la asistencia médica necesaria;

d) Permitan a los representantes de la organización internacional competente asistir a cualesquiera audiencias relativas a los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y a sus familias;

e) Garanticen la pronta liberación de los funcionarios de las Naciones Unidas, expertos y miembros de sus familias detenidos o encarcelados en violación de su inmunidad, de conformidad con las convenciones mencionadas en el párrafo 5;

7. Invita a los Estados Miembros a considerar con prontitud la posibilidad de firmar la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado y de pasar a ser partes en ella;

8. Invita al Secretario General a que prepare un documento que contenga los principios de protección pertinentes incluidos en la Convención para que sirvan de directrices en las negociaciones bilaterales de acuerdos de sede y acuerdos de misión con los gobiernos interesados; en esas negociaciones bilaterales se tomaría en cuenta la legislación nacional cuando el gobierno interesado no hubiese ratificado la Convención o no se hubiese adherido a ella;

9. Pide al Secretario General que presente a la Comisión, en su 53º período de sesiones, un informe acerca de la situación de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, sobre la situación de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas, y de sus familias, que se encuentren detenidos, encarcelados, desaparecidos o retenidos en un país contra su voluntad, sobre los casos que se hayan solucionado con éxito desde la presentación del informe anterior y sobre la aplicación de las medidas a que se hace referencia en la presente resolución.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/30. Cuestión de las desapariciones forzadas

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente la resolución 33/173 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1978, en que la Asamblea pidió a la Comisión de Derechos Humanos que examinara la cuestión de las personas desaparecidas con miras a hacer las

recomendaciones apropiadas, así como todas las demás resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce,

Recordando su resolución 20 (XXXVI), de 29 de febrero de 1980, por la que decidió establecer un grupo de trabajo compuesto por cinco de sus miembros, en calidad de expertos a título individual, para examinar las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, y sus resoluciones 1991/41, de 5 de marzo de 1991, 1992/30, de 28 de febrero de 1992, 1993/35, de 5 de marzo de 1993, 1994/39, de 5 de marzo de 1994, y 1995/38, de 3 de marzo de 1995,

Recordando también la resolución 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992, por la que la Asamblea aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,

Subrayando que en la Declaración y Programa de Acción de Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos acogió con beneplácito la aprobación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y pidió a todos los Estados que adoptaran eficaces medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para prevenir, erradicar y castigar los actos que provocan desapariciones forzadas,

Observando que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias considera que la aprobación de la mencionada Declaración constituye el logro más alentador que se ha producido desde su creación en la lucha contra las desapariciones forzadas, sobre todo porque en ella se estipula que la práctica sistemática de las desapariciones representa un crimen de lesa humanidad,

Expresando su preocupación a este respecto porque, según el Grupo de Trabajo, la práctica de varios Estados puede ser contraria a la Declaración,

Convencida de la necesidad de que se sigan aplicando las disposiciones de la resolución 33/173 de la Asamblea General y de las demás resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las personas desaparecidas, a fin de encontrar solución a los casos de desapariciones y de eliminar el fenómeno de las desapariciones forzadas, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones de la Declaración,

Teniendo en cuenta la resolución 49/193 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994,

Profundamente preocupada porque la práctica de las desapariciones forzadas se ha intensificado y generalizado en diversas regiones del mundo,

Preocupada por los numerosos informes de casos de hostigamiento, malos tratos e intimidaciones contra los testigos de desapariciones o familiares de los desaparecidos,

Celebrando, a este respecto, que el Grupo de Trabajo informe de que la mayoría de los Estados prestan mayor cooperación,

Recordando su resolución 1995/75, de 8 de marzo de 1995, sobre cooperación con los representantes de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas,

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1996/38) y el informe del experto, miembro del Grupo de Trabajo y encargado del proceso especial para tratar el problema de las personas desaparecidas en el territorio de la ex Yugoslavia (E/CN.4/1996/36),

1. Expresa su reconocimiento al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias por la forma en que cumple su cometido y le agradece que le haya presentado un informe de conformidad con su resolución 1995/38, de 3 de marzo de 1995;

2. Toma nota del informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1996/38);

3. Alienta al Grupo de Trabajo a que, en sus esfuerzos por contribuir a la eliminación de la práctica de las desapariciones forzadas, presente a la Comisión toda la información que considere necesaria, así como toda recomendación concreta relativa al cumplimiento de su mandato;

4. Considera que la función primordial del Grupo de Trabajo, según se describe en sus informes, es servir de canal de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos de que se trate con miras a asegurar que se investiguen los casos concretos suficientemente documentados y claramente identificados, y cerciorarse de que esta información corresponde al ámbito de su mandato y contiene los elementos requeridos;

5. Subraya la necesidad de que el Grupo de Trabajo tenga en cuenta las disparidades entre el hombre y la mujer en su proceso de preparación de informes, en particular en la reunión de datos y la formulación de recomendaciones;

6. Recuerda al Grupo de Trabajo la necesidad de observar, en su misión humanitaria, las normas y prácticas de las Naciones Unidas en lo que se refiere a la tramitación de las comunicaciones y al examen de las respuestas de los gobiernos;

7. Lamenta el hecho de que algunos gobiernos nunca hayan dado una respuesta circunstanciada sobre los casos de desapariciones forzadas que presuntamente han ocurrido en sus países, ni hayan aplicado las recomendaciones al respecto contenidas en los informes del Grupo de Trabajo;

8. Exhorta a los gobiernos interesados, en particular a los que aún no han contestado a las comunicaciones que les ha transmitido el Grupo de Trabajo, a que adopten medidas tan rápidamente como sea posible respecto de aquellas comunicaciones, a que cooperen con el Grupo de Trabajo y le presten su asistencia de modo que pueda cumplir su mandato de manera eficaz, y en especial a que respondan con prontitud a las solicitudes de información que les dirija;

9. Exhorta también a los gobiernos interesados a que intensifiquen su cooperación con el Grupo de Trabajo respecto de toda medida adoptada en aplicación de las recomendaciones que les haya dirigido el Grupo;

10. Exhorta una vez más a los gobiernos a que adopten medidas para proteger a las familias de las personas desaparecidas contra todo acto de intimidación o contra cualquier maltrato de que pudieran ser objeto;

11. Alienta a los gobiernos a que consideren seriamente la posibilidad de invitar al Grupo de Trabajo a visitar sus países, a fin de que el Grupo pueda cumplir su mandato en forma todavía más eficaz;

12. Exhorta a los gobiernos a que adopten medidas para que, en caso de estado de excepción, se garantice la protección de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la prevención de las desapariciones forzadas;

13. Recuerda a los gobiernos la necesidad de velar por que sus autoridades competentes efectúen investigaciones prontas e imparciales en cualquier circunstancia, siempre que haya motivos para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio sujeto a su jurisdicción;

14. Recuerda que, si se confirman los hechos, se debe enjuiciar a los autores;

15. Expresa su profundo agradecimiento a los numerosos gobiernos que han cooperado con el Grupo de Trabajo y han respondido a sus solicitudes de información, así como a los gobiernos que han invitado al Grupo de Trabajo a visitar sus países, les ruega que presten toda la atención necesaria a sus recomendaciones y les invita a que informen al Grupo de las medidas que adopten al respecto;

16. Encomia en particular los esfuerzos de los gobiernos que procuran investigar y/o elaborar mecanismos adecuados para investigar cualquier caso de desaparición forzada que se señale a su atención, y alienta a todos los gobiernos interesados a que desplieguen más esfuerzos en esa esfera;

17. Invita a los Estados a que, teniendo en cuenta las conclusiones del Grupo de Trabajo, estudien la posibilidad de adoptar medidas eficaces, incluidas, cuando proceda, medidas legislativas apropiadas para aplicar los principios de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, considerando al propio tiempo las observaciones generales del Grupo de Trabajo que figuran en los párrafos 43 a 58 de su informe;

18. Invita, a este respecto, a todos los gobiernos a que apliquen las disposiciones correspondientes en los planos nacional y regional y en cooperación con las Naciones Unidas, mediante, cuando sea apropiado, la prestación de asistencia técnica;

19. Recuerda que todo acto de desaparición forzada es un delito punible con penas apropiadas en las que se tenga en cuenta la extrema gravedad de ese acto en la ley penal;

20. Alienta a los Estados a que, como ya han hecho algunos, den información concreta sobre las medidas que hayan adoptado para poner en práctica la Declaración, así como sobre los obstáculos con que han tropezado;

21. Invita nuevamente al Grupo de Trabajo a que identifique los obstáculos que impiden aplicar la Declaración, recomiende la forma de superar estos obstáculos y prosiga a este respecto su diálogo con los gobiernos e instituciones interesados;

22. Invita al Grupo de Trabajo a que prosiga su reflexión sobre la cuestión de la impunidad, en estrecha colaboración con los relatores nombrados por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y teniendo debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes de la Declaración;

23. Pide al Grupo de Trabajo que preste particular atención a los casos de niños víctimas de desapariciones forzadas y de hijos de padres desaparecidos y que coopere estrechamente con los gobiernos interesados en la búsqueda e identificación de esos niños;

24. Toma nota de las actividades realizadas por las organizaciones no gubernamentales con objeto de propiciar la aplicación de la Declaración y las invita a continuar facilitando su difusión y contribuir a los trabajos de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías;

25. Toma nota asimismo de la cooperación prestada al Grupo de Trabajo por organizaciones no gubernamentales;

26. Toma nota con interés del informe del experto, miembro del Grupo de Trabajo y encargado del proceso especial para tratar el problema de las personas desaparecidas en el territorio de la ex Yugoslavia (E/CN.4/1996/36);

27. Pide al Grupo de Trabajo que presente a la Comisión en su 53º período de sesiones un informe sobre sus actividades y que siga cumpliendo su mandato discreta y concienzudamente;

28. Pide una vez más al Secretario General que cuide de que el Grupo de Trabajo reciba toda la asistencia y los recursos que necesita para el desempeño de su mandato y, más concretamente, para la realización y el seguimiento de misiones y para reunirse en los países que estén dispuestos a acogerlo;

29. Pide de nuevo al Secretario General que informe regularmente al Grupo de Trabajo y a la Comisión de Derechos Humanos de las medidas que adopte para asegurar una amplia difusión y promoción de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y recopile las observaciones que puedan formular los gobiernos sobre las medidas que hayan adoptado en su caso para tener en cuenta la Declaración.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/31. Derechos humanos y ciencia forense

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando sus resoluciones 1993/33, de 5 de marzo de 1993 y 1994/31, de 4 de marzo de 1994,

Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario General sobre los derechos humanos y la ciencia forense (E/CN.4/1996/41), presentado en cumplimiento de su resolución 1994/31,

Acogiendo también con satisfacción la lista provisional de organizaciones y expertos individuales en ciencia forense compilada por el Secretario General en su informe y también de las organizaciones mencionadas en sus informes anteriores (E/CN.4/1993/20 y E/CN.4/1994/24),

Expresando su gratitud a los gobiernos y organizaciones que recomendaron nombres de organizaciones y expertos para la lista,

Consciente de que otras organizaciones y expertos individuales en ciencia forense deberían agregarse a la lista provisional,

Acogiendo con satisfacción la comunicación que ha mantenido el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias con determinadas organizaciones y determinados particulares en la esfera de la ciencia forense y los derechos humanos, y la elaboración por el Grupo de Trabajo de un esquema preliminar para el establecimiento de un equipo permanente de expertos forenses,

Observando que en los informes del Grupo de Trabajo, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y de diversos relatores por países se ha hecho hincapié en que los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales necesitan disponer de conocimientos científicos forenses para investigar fallecimientos y aclarar desapariciones,

Observando también que la ciencia forense puede ayudar a reunir a hijos de personas desaparecidas, que han sido separados por la fuerza de sus padres, con familiares supervivientes,

Observando además que la medicina forense es un medio importante de detectar pruebas de tortura,

Observando que en muchos países interesados no se dispone de suficientes conocimientos especializados en la ciencia forense y esferas conexas para investigar de manera eficaz las violaciones de los derechos humanos,

Reconociendo que la formación de equipos nacionales en procedimientos apropiados de exhumación e identificación es una condición previa para la eficaz investigación de violaciones de los derechos humanos,

Consciente de que diversos gobiernos han pedido al Secretario General que proporcione asistencia técnica a este respecto,

Consciente también de que la experiencia de investigaciones de las Naciones Unidas sobre situaciones de hecho respalda la necesidad de disponer de una lista de expertos en ciencia forense,

Consciente además de que varios relatores especiales han acogido con satisfacción los esfuerzos encaminados a establecer un equipo permanente de expertos forenses que les presten ayuda en la realización de sus mandatos de derechos humanos,

Recordando los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, aprobados por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989,

Tomando en consideración el modelo propuesto del protocolo de autopsia preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que figura en el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.91.IV.1),

Tomando también en consideración las directrices para la realización de investigaciones de las Naciones Unidas sobre denuncias de matanzas,

1. Invita a los Estados a que adopten medidas para introducir en sus reglas y prácticas las normas internacionales establecidas en los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, así como el modelo de protocolo de autopsia contenido en el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias;

2. Pide al Secretario General que celebre nuevas consultas con los gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones profesionales de expertos forenses, las organizaciones mencionadas en sus informes de 1993, 1994 y 1996, y otras instituciones interesadas, con miras a:

a) Identificar expertos a los que podría pedirse que se sumaran a equipos forenses o que prestaran asesoramiento o asistencia a mecanismos temáticos o por países, a servicios de asesoramiento y a programas de asistencia técnica;

b) Presentar datos biográficos sobre los expertos, en particular: calificaciones profesionales, empleo actual, dirección, sexo (se alienta la propuesta de candidaturas de expertas) y tipos de asistencia que podrían prestar; y

c) Recabar su asesoramiento en materia de elaboración de principios, orientación, procedimientos, mecanismos, experiencia práctica y formación, como complemento del Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias;

3. Pide también al Secretario General que, sobre la base de esas consultas y de la labor constante que realiza el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para prestar asistencia activa, continúe los esfuerzos encaminados a establecer una lista de expertos forenses y de expertos en esferas conexas a los que podría pedirse que prestaran a los mecanismos internacionales en la esfera de los derechos humanos, los gobiernos y el Centro de Derechos Humanos servicios técnicos y consultivos, asesoramiento con respecto a la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos y la formación de equipos locales y/o asistencia en la reunificación de las familias de personas que hayan desaparecido;

4. Pide además al Secretario General que actualice cada año esa lista y la ponga a disposición de los grupos de trabajo, los relatores especiales y expertos de los mecanismos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos a fin de que puedan recabar la ayuda de esos expertos para evaluar documentos y otras pruebas y les acompañen en visitas a países;

5. Pide al Secretario General que vele por que los expertos forenses se ajusten a los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, aprobados por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989;

6. Pide también al Secretario General que proporcione recursos adecuados, con cargo a los recursos generales disponibles de las Naciones Unidas y dentro de los límites de esos recursos, para financiar las actividades del Centro de Derechos Humanos en la aplicación de la presente resolución;

7. Pide además al Secretario General que presente a la Comisión en su 54º período de sesiones un informe sobre los progresos realizados en esta esfera, en particular:

a) La existencia de una lista amplia y actualizada de expertos en la que figuren datos biográficos sobre éstos e indicaciones acerca de su disponibilidad;

b) Un acuerdo tipo o acuerdo de servicios de cooperación revisado que regule el uso de los expertos forenses, en el que figuren disposiciones relativas a la protección de éstos en el desempeño de sus funciones; y además que formule las recomendaciones que considere apropiadas;

8. Invita al Centro de Derechos Humanos y a la División de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría, a que estudien la posibilidad de revisar el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias tomando en cuenta la experiencia práctica en la utilización del Manual y las observaciones recibidas;

9. Decide examinar la cuestión en su 54º período de sesiones en relación con el tema "Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión";

10. Decide también recomendar al Consejo Económico y Social que adopte el siguiente proyecto de decisión:

El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 1996/31 de la Comisión de Derechos Humanos, de 19 de abril de 1996, aprueba las peticiones de la Comisión al Secretario General para que:

a) Mantenga y actualice la lista de expertos forenses y de expertos en esferas conexas a los que podría pedirse que prestaran a los mecanismos internacionales en la esfera de los derechos humanos, los

gobiernos y el Centro de Derechos Humanos servicios técnicos y consultivos, asesoramiento con respecto a la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos y la formación de equipos locales y/o asistencia en la reunificación de las familias de los desaparecidos; y

b) Proporcione recursos adecuados, con cargo a los recursos generales disponibles de las Naciones Unidas y dentro de los límites de esos recursos, para financiar las actividades del Centro de Derechos Humanos en la aplicación de la resolución 1996/31 de 19 de abril de 1996.

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/32. Los derechos humanos en la administración de justicia, en particular los de los niños y menores detenidos

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por sus Protocolos Facultativos, en particular el artículo 6 de este último Pacto,

Guiada también por la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular, sus artículos 3, 37, 39 y 40, y por las disposiciones pertinentes de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

Reconociendo el papel central de la administración de justicia en la promoción y protección de los derechos humanos,

Destacando la importancia de coordinar las actividades realizadas en esta esfera bajo la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos con las realizadas bajo la responsabilidad de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,

Tomando nota de que las mujeres, los menores y los niños son con frecuencia las víctimas más vulnerables de las violaciones de los derechos humanos en la administración de justicia y que la determinación y denuncia de esas violaciones exigen especial vigilancia,

Consciente de la situación específica de los niños y los menores detenidos y de sus necesidades especiales mientras están privados de

libertad, en particular su vulnerabilidad a diversas formas de vejación, injusticia y humillación,

Acogiendo con satisfacción las importantes actividades del Comité de los Derechos del Niño, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en lo que respecta a las necesidades especiales de los niños y los menores detenidos,

Tomando nota de que el Comité de los Derechos del Niño atribuye especial importancia a la cuestión de la administración de la justicia de menores y que incluye en sus conclusiones sobre los informes de los Estados Partes recomendaciones concretas sobre la prestación de servicios de asesoramiento y cooperación técnica en esta esfera,

Recordando las recomendaciones del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, relativas a la justicia de menores y a los niños como víctimas o autores de delitos,

Profundamente preocupada por la gravedad y la brutalidad con que los niños y los menores son utilizados como instrumento para las actividades delictivas,

Reafirmando que los intereses supremos del niño y del menor deben ser la consideración primordial en todas las decisiones que conciernan al hecho de privarles de libertad,

1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General (E/CN.4/1996/31 y Add.1) y de las respuestas recibidas de diversos gobiernos;

2. Reafirma la importancia de la plena aplicación de todas las normas pertinentes de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos en la administración de justicia;

3. Reitera una vez más su llamamiento a todos los Estados Miembros para que no escatimen esfuerzo alguno a fin de proveer eficaces mecanismos y procedimientos legislativos y de otra índole, así como recursos adecuados, para garantizar la plena aplicación de esas normas,

4. Hace un llamamiento a los gobiernos para que incluyan la administración de justicia en sus planes nacionales de desarrollo como parte integrante del proceso de desarrollo y asignen los recursos necesarios a la

prestación de servicios de asistencia jurídica con miras a la promoción y protección de los derechos humanos;

5. Reconoce la importante función que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales, incluidas las asociaciones profesionales de abogados y jueces, en la promoción de los derechos humanos en la administración de justicia;

6. Invita a los gobiernos a que impartan formación en materia de derechos humanos y la administración de justicia, incluida la justicia de menores, a todos los jueces, abogados, fiscales, asistentes sociales y demás profesionales que se ocupan de cuestiones de justicia de menores, incluidos los agentes de policía y de inmigración;

7. Exhorta a los relatores especiales, representantes especiales y grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos a que sigan prestando especial atención a las cuestiones relativas a la protección eficaz de los derechos humanos en la administración de justicia y que, siempre que sea procedente, formulen recomendaciones concretas al respecto, incluidas propuestas de medidas concretas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica;

8. Alienta a los Estados a que hagan uso de la asistencia técnica que ofrecen los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica de las Naciones Unidas a fin de reforzar su capacidad y su infraestructura nacionales en la esfera de la administración de justicia;

9. Insta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a que acoja favorablemente las solicitudes de asistencia en la esfera de la administración de justicia y a que fortalezca la coordinación en todo el sistema de las actividades en esa esfera, en particular entre el programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y los servicios de asesoramiento y cooperación técnica del programa de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal;

10. Reconoce que todo niño y menor en conflicto con la ley debe ser tratado de manera acorde con su dignidad y sus necesidades;

11. Exhorta a todos los Estados a que den gran prioridad a la promoción y protección de todos los derechos de los niños y menores en la administración de justicia;

12. Insta a los Estados a que tomen plenamente en cuenta en su legislación y práctica nacionales las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riyad), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y les den amplia difusión;

13. Insta asimismo a los Estados a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento del principio de que sólo como último recurso se debe privar de libertad a los niños y menores y por el más breve período de tiempo que proceda, en particular antes del juicio, y para garantizar que, según proceda, los niños y menores detenidos o encarcelados estén separados de los adultos;

14. Recomienda a los Estados que velen por que las estructuras, los procedimientos y los programas de la administración de justicia para los menores delincuentes promuevan la ayuda a los niños a fin de que se responsabilicen de sus actos, y fomenten, entre otras cosas, la reparación, la mediación y la restitución, especialmente en relación con las víctimas directas del delito;

15. Pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que preste especial atención a la cuestión de la justicia de menores y, en estrecha cooperación con el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la División de Prevención del Delito y Justicia Penal, de la Secretaría de las Naciones Unidas, desarrolle estrategias destinadas a garantizar la eficaz coordinación de los programas de cooperación técnica en la esfera de la justicia de menores, en particular dentro del marco de su Plan de Acción para fortalecer la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño;

16. Pide al Secretario General que informe a la Comisión en su 53º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

17. Decide examinar esta cuestión en su 53º período de sesiones en relación con el tema titulado "Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión".

51ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/33. La tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

A

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Recordando la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX) de 9 de diciembre de 1975,

Recordando también la resolución 39/46 de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1984, por la que la Asamblea aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y exhortó a todos los gobiernos a que considerasen la posibilidad de firmar y ratificar la Convención con carácter prioritario,

Recordando asimismo la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en particular el párrafo 30 de la primera parte, en que la Conferencia Mundial declaró que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obstaculizaban seriamente el pleno disfrute de todos los derechos humanos, y los párrafos 54 a 61 de la segunda parte, en que la Conferencia Mundial instaba a los Estados a que pusieran fin inmediatamente a la práctica de la tortura y erradicasen para siempre ese mal, derogasen la legislación que favorecía la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, y persiguiesen penalmente esas violaciones, y declaraba que debía concederse gran prioridad a la aportación de los recursos necesarios para prestar asistencia a las víctimas de la tortura, en particular mediante aportaciones adicionales al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura,

Teniendo presente su resolución 1995/37 de 3 de marzo de 1995,

Consternada ante la difundida práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Subrayando que la tortura constituye una tentativa criminal de destruir física y mentalmente a un ser humano que no puede nunca verse justificada por ninguna circunstancia, por ninguna ideología ni por ningún interés supremo, y convencida de que una sociedad que tolera la tortura no puede pretender en ningún caso que respeta los derechos humanos,

Decidida a promover la plena aplicación de las disposiciones del derecho internacional y nacional que prohíben la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Poniendo de relieve la pertinencia, para la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del Conjunto de Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (resoluciones del Consejo Económico y Social 663 C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977), del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (resolución 34/169 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1979, anexo), de los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de las personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 37/194 de la Asamblea General, anexo), de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo), así como del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo),

Recordando el artículo 10 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que dispone que todo Estado Parte velará por que se incluya una educación y una información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión,

Tomando nota de la labor realizada en el cuarto período de sesiones del grupo de trabajo de composición abierta de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo de la Convención,

Recordando la resolución 36/151 de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1981, en la que la Asamblea observó con profunda preocupación que en varios países se cometían actos de tortura, reconoció la necesidad de proporcionar asistencia a las víctimas de la tortura con un espíritu puramente humanitario y de establecer el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura,

Recordando asimismo la declaración de la Junta de Síndicos del Fondo acerca de la necesidad de recibir contribuciones de los gobiernos con carácter periódico, lo cual, entre otras cosas, impediría que se interrumpieran programas a cuya subsistencia el Fondo contribuye,

Observando que el número de solicitudes es cada vez mayor y que la Junta de Síndicos ha pedido reiteradamente personal suficiente para las actividades del Fondo,

Tomando nota de la información facilitada por el Secretario General en sus informes sobre el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (E/CN.4/1996/33 y Add.1 y A/50/512),

Tomando nota con satisfacción de la existencia y rápida expansión de una red internacional de centros de rehabilitación de las víctimas de la tortura, que desempeñan un importante papel en la prestación de asistencia a estas víctimas, y de la colaboración del Fondo con esos centros,

Subrayando que en virtud del artículo 4 de la Convención los actos de tortura deben pasar a constituir delitos en la legislación penal de los Estados, que esos actos constituyen una grave violación de los Convenios de Ginebra de 1949 y que sus perpetradores pueden ser objeto de persecución penal y de sanción,

1. Insta a todos los Estados a que se hagan partes en la Convención con carácter prioritario;

2. Invita a todos los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella, así como a los Estados que no lo hayan hecho todavía, a que formulen la declaración prevista en los artículos 21 y 22 de la Convención y a que consideren la posibilidad de retirar sus reservas con respecto al artículo 20;

3. Alienta a los Estados Partes a que notifiquen al Secretario General lo antes posible su aceptación de las enmiendas a los artículos 17 y 18 de la Convención;
4. Toma nota del informe del Secretario General sobre la situación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (E/CN.4/1996/34);
5. Insta a todos los gobiernos a que promuevan la rápida y plena aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena y en particular la sección relativa a la protección contra la tortura;
6. Acoge con satisfacción el informe del Comité contra la Tortura sobre sus períodos de sesiones 11º y 12º (A/50/44);
7. También acoge complacida la labor del Comité contra la Tortura y su práctica de formular observaciones finales después del examen de los informes, así como su práctica de investigar los casos en que haya indicios de una práctica sistemática de la tortura en los Estados Partes;
8. Recuerda a todos los Estados que según el párrafo 60 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, "los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley";
9. Pide al Secretario General que garantice, dentro del marco presupuestario global de las Naciones Unidas, una dotación de personal estable y los medios técnicos necesarios para el desempeño eficiente de las funciones del Comité contra la Tortura;
10. Insta a los Estados Partes cuyo atraso en el pago de las cuotas es anterior a la decisión del Secretario General de financiar el Comité contra la Tortura con cargo al presupuesto ordinario a que cumplan de inmediato sus obligaciones;
11. Destaca la obligación de los Estados Partes, de conformidad con el artículo 10 de la Convención, de garantizar la educación y formación del personal que pueda participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión, y pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, de conformidad con su mandato establecido en la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, proporcione, a instancia de los

gobiernos, servicios de asesoramiento a este respecto y asistencia técnica para la elaboración, producción y distribución de material didáctico apropiado a estos efectos;

12. Expresa su reconocimiento a la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura por la labor que ha realizado;

13. Pide a la Junta de Síndicos del Fondo que informe a la Comisión en su 53º período de sesiones y presente una estimación actualizada de la necesidad global de servicios de rehabilitación para las víctimas de la tortura y las necesidades de financiación internacional al respecto;

14. Expresa su gratitud y reconocimiento a los gobiernos, organizaciones y particulares que ya han aportado sus contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

15. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, organizaciones y particulares que estén en condiciones de hacerlo para que atiendan favorablemente las solicitudes de contribuciones al Fondo, de ser posible con carácter periódico cada año antes de la reunión de la Junta de Síndicos y también, de ser posible, que aumenten considerablemente el número y el monto de las contribuciones habida cuenta de la demanda cada vez mayor de asistencia;

16. Pide al Secretario General que continúe incluyendo al Fondo cada año entre los programas para los que se prometen fondos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones para las Actividades de Desarrollo;

17. Reitera su solicitud al Secretario General para que transmita a todos los gobiernos los llamamientos de la Comisión para obtener contribuciones al Fondo;

18. Reitera asimismo su solicitud al Secretario General de que aproveche todas las posibilidades para prestar asistencia a la Junta de Síndicos del Fondo en su labor para dar a conocer el Fondo y su labor humanitaria y en sus llamamientos para obtener contribuciones;

19. Pide al Secretario General, de conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23, segunda parte, párr. 16), que garantice normas estrictas y transparentes de gestión de proyectos para el

Fondo y tome medidas para la celebración de reuniones anuales de información abiertas a la participación de todos los Estados Miembros y todas las organizaciones que intervengan directamente en los proyectos apoyados por el Fondo;

20. Pide asimismo al Secretario General que garantice, dentro del marco presupuestario global de las Naciones Unidas, la dotación de personal estable y los medios técnicos necesarios para asegurar el funcionamiento y la gestión eficientes del Fondo;

21. Pide además al Secretario General que siga manteniendo informada a la Comisión de las operaciones del Fondo con carácter anual y que le presente informes anuales sobre la situación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

22. Decide seguir examinando estas cuestiones en su 53º período de sesiones.

B

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando su resolución 1985/33 de 13 de marzo de 1985, en la que decidió nombrar por un año un relator especial para que examinara las cuestiones relativas a la tortura, y todas sus resoluciones ulteriores por las que se prorrogó ese mandato, la última vez por otros tres años en el párrafo 13 de su resolución 1995/37 B de 3 de marzo de 1995, manteniendo al propio tiempo el ciclo anual de presentación de informes,

Recordando también las conclusiones y recomendaciones del anterior Relator Especial, que la Comisión puso de relieve en sus resoluciones 1987/29 de 10 de marzo de 1987, 1988/32 de 8 de marzo de 1988, 1989/33 de 6 de marzo de 1989, 1990/34 de 2 de marzo de 1990, 1991/38 de 5 de marzo de 1991, 1992/32 de 28 de febrero de 1992, 1993/40 de 5 de marzo de 1993, 1994/37 de 4 de marzo de 1994 y 1995/37 de 3 de marzo de 1995,

1. Felicita al Relator Especial por su informe (E/CN.4/1996/35 y Add.1 y Add.2);

2. Destaca las recomendaciones del Relator Especial que figuran en su informe, así como las recomendaciones de años anteriores contenidas en el documento E/CN.4/1995/34;

3. Destaca en particular que nadie será objeto de torturas o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que toda denuncia de semejantes actos debe ser examinada oportuna e imparcialmente por la autoridad nacional competente, que las personas que alienten, ordenen, toleren o cometan esos actos deben ser consideradas responsables y sancionadas severamente, en especial los funcionarios a cargo del lugar de detención en que haya tenido lugar el acto prohibido, y que los regímenes jurídicos nacionales deben garantizar que las víctimas de tales actos obtengan reparación y reciban una indemnización justa y apropiada y servicios sociales y médicos apropiados de rehabilitación;

4. Recuerda a todos los Estados que una detención prolongada en régimen de incomunicación puede ser propicia a la comisión de actos de tortura y puede en sí misma constituir un trato cruel, inhumano o degradante;

5. Invita al Relator Especial a examinar las cuestiones relativas a la tortura dirigida primordialmente contra las mujeres y los niños y las condiciones que han conducido a estas torturas, y a formular las recomendaciones oportunas para impedir las formas de tortura dirigidas específicamente contra la mujer así como la tortura de los niños;

6. Aprueba los métodos de trabajo empleados por el Relator Especial, en particular el de los llamamientos urgentes;

7. Considera conveniente que el Relator Especial siga intercambiando opiniones con los mecanismos y órganos de derechos humanos pertinentes, especialmente el Comité contra la Tortura y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en particular con miras a aumentar su eficacia y la cooperación mutua, y que siga cooperando con los programas competentes de las Naciones Unidas, en particular el relativo a la prevención del delito y la justicia penal;

8. Hace un llamamiento a todos los gobiernos para que cooperen con el Relator Especial y le presten ayuda en el cumplimiento de sus tareas, facilitándole toda la información solicitada y dando una respuesta adecuada a sus llamamientos urgentes;

9. Insta a los gobiernos que todavía no han respondido a las comunicaciones que les ha transmitido el Relator Especial a que respondan a ellas con rapidez;

10. Alienta a los gobiernos a que consideren seriamente la posibilidad de invitar al Relator Especial a visitar sus respectivos países a fin de que pueda cumplir su mandato con mayor eficacia todavía;

11. Pide al Relator Especial que siga incluyendo en su informe información sobre el seguimiento dado por los gobiernos a sus recomendaciones, visitas y comunicaciones;

12. Pide al Secretario General que preste al Relator Especial la asistencia que necesite para llevar a cabo todas sus actividades y poder presentar su informe a la Comisión en su 53º período de sesiones.

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/34. La independencia e imparcialidad del poder
judicial, los jurados y asesores y la
independencia de los abogados

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los artículos 7, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y teniendo en cuenta la Declaración y Programa de Acción de Viena, en particular el párrafo 27 de la primera parte y los párrafos 88, 90 y 95 de la segunda parte,

Convencida de que la existencia de un poder judicial independiente e imparcial y de abogados independientes es condición previa esencial para proteger los derechos humanos y garantizar que no haya discriminaciones en la administración de justicia,

Recordando su resolución 1994/41 de 4 de marzo de 1994 en la que pidió al Presidente de la Comisión que nombrara por un período de tres años a un Relator Especial que se encargara de la cuestión de la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados,

Recordando asimismo su resolución 1995/36 de 3 de marzo de 1995 en la que hizo suya la decisión del Relator Especial de utilizar, a partir de 1995, el título abreviado de "Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados",

Recordando también la resolución 40/32 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1985, en la que la Asamblea hizo suyos los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y la resolución 40/146 de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1985,

Recordando la resolución 45/166 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1990, en la que la Asamblea acogió con satisfacción los Principios básicos sobre la función de los abogados y las Directrices para lograr la independencia de los jueces, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, e invitó a los gobiernos a que los respetaran y los tuvieran en cuenta en la legislación y en la práctica nacionales,

Recordando asimismo las recomendaciones aprobadas por el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en El Cairo del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, que se refieren, entre otras cosas, a la exhortación hecha a los Estados Miembros para que garanticen la independencia e imparcialidad del poder judicial y el buen funcionamiento de los servicios fiscales y jurídicos en la esfera de la justicia penal y los asuntos de policía, tomando en cuenta los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura,

Recordando asimismo la Declaración de Beijing sobre los Principios relativos a la independencia de la judicatura, adoptada en agosto de 1995 por la Sexta Conferencia de Presidentes de las Cortes Supremas Asiáticas, y la Declaración de El Cairo, adoptada en 1995 por la Tercera Conferencia de Ministros de Justicia Francófonos,

Reconociendo la importancia que tiene para el Relator Especial poder cooperar estrechamente, en el marco de su mandato, con el Centro de Derechos Humanos en la esfera de los servicios de asesoramiento y cooperación técnica, lo cual podría contribuir a garantizar la independencia de los jueces y abogados,

Reconociendo la importancia del papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, los colegios de abogados y las asociaciones profesionales de jueces en la defensa de los principios de la independencia de los abogados y magistrados,

Tomando nota con preocupación de que cada vez son más frecuentes los atentados contra la independencia de los magistrados, abogados y asesores y consciente de la estrecha relación que hay entre el menoscabo de las garantías de los magistrados, los abogados y el personal y los auxiliares de justicia y la intensidad y frecuencia de las violaciones de los derechos humanos,

Tomando nota del segundo informe (E/CN.4/1996/37) presentado por el Relator Especial sobre el desempeño de su mandato,

1. Toma nota del segundo informe presentado por el Relator Especial sobre las actividades relacionadas con su mandato (E/CN.4/1996/37);
2. Toma nota asimismo de los métodos de trabajo basados en la cooperación adoptados por el Relator Especial en la preparación de su informe y en el desempeño de su mandato, descrito en la resolución 1994/41 de la Comisión;
3. Acoge complacida los numerosos contactos que el Relator Especial ha mantenido con varias organizaciones intergubernamentales e internacionales y órganos de las Naciones Unidas, y le alienta a que continúe por esa senda;
4. Toma nota con reconocimiento de que el Relator Especial está decidido a lograr que se difunda en la máxima medida posible la información relativa a las normas vigentes respecto de la independencia e imparcialidad del poder judicial y la independencia de los abogados en relación con las publicaciones y actividades de promoción del Centro de Derechos Humanos;
5. Invita al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a que continúe prestando asistencia técnica destinada a capacitar profesionalmente a magistrados y abogados y a que incorpore al Relator Especial a la elaboración de un manual sobre la capacitación profesional de magistrados y abogados en materia de derechos humanos;
6. Insta a todos los gobiernos a que ayuden al Relator Especial a desempeñar su mandato y a que le transmitan toda la información que solicite;
7. Alienta a los gobiernos que tienen dificultades en garantizar la independencia de jueces y abogados, o que están decididos a tomar medidas para aplicar más a fondo estos principios, a que consulten al Relator Especial y consideren la posibilidad de utilizar sus servicios, por ejemplo invitándole a su país si los gobiernos interesados lo consideran necesario;

8. Pide al Secretario General que, dentro de los límites del presupuesto ordinario existente, proporcione al Relator Especial toda la asistencia que necesite para el desempeño de su mandato;

9. Pide al Relator Especial que presente un informe sobre las actividades relacionadas con su mandato a la Comisión en su 53º período de sesiones y decide examinar esta cuestión en dicho período de sesiones.

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VII.]

1996/35. El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, otros instrumentos pertinentes de derechos humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena,

Reafirmando que, en cumplimiento de los principios de derechos humanos internacionalmente proclamados, las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos deben recibir, en los casos apropiados, restitución, indemnización y rehabilitación,

Considerando que la cuestión de la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales ha recibido una atención insuficiente y debe continuar siendo abordada de manera más sistemática y exhaustiva en los planos nacional e internacional,

Tomando nota con interés de la positiva experiencia de países que han establecido políticas de reparación a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos,

Reiterando su satisfacción por el estudio que sobre este tema ha preparado el Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Sr. Theo van Boven, contenido en su informe definitivo (E/CN.4/Sub.2/1993/8),

Recordando su resolución 1994/35, de 4 de marzo de 1994, en la que expresó su esperanza de que se prestaría una atención prioritaria a esta cuestión, en particular por lo que respecta al ámbito específico de las violaciones de los derechos humanos, y consideró que los principios y directrices básicos propuestos en el estudio del Relator Especial constituían una base útil con tal fin, y recomendó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que, de conformidad con su resolución 1993/29, de 25 de agosto de 1993, adoptase medidas para examinar los principios y directrices básicos propuestos con miras a formular propuestas al respecto e informar a la Comisión,

Recordando también su resolución 1995/34, de 3 de marzo de 1995, por la que solicitó a los Estados que proporcionasen información al Secretario General sobre la legislación que hubiesen adoptado o se dispusiesen a adoptar relacionada con el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y libertades fundamentales,

Tomando nota del informe del Secretario General sometido a la Comisión en cumplimiento de la resolución 1995/34 (E/CN.4/1996/29),

1. Insta a la comunidad internacional a dar mayor atención al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

2. Alienta a la Subcomisión, de conformidad con su decisión 1995/117 de 24 de agosto de 1995, a continuar en su 48º período de sesiones el examen de los principios y directrices básicas propuestos, con miras a hacer progresos sustanciales sobre esta cuestión en el ámbito específico de las violaciones de los derechos humanos;

3. Expresa su agradecimiento a los Estados que proporcionaron información sobre la materia al Secretario General, de conformidad con su resolución 1995/34, por su valiosa contribución en este ámbito;

4. Pide a los Estados que aún no lo hayan hecho, que informen al Secretario General sobre la legislación que hayan adoptado, o estén contemplando adoptar, en relación con la restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

5. Expresa su agradecimiento al Secretario General por su informe (E/CN.4/1996/29 y adiciones);

6. Pide al Secretario General que elabore un informe adicional sobre la base de las respuestas recibidas de los Estados y que le presente dicho informe en su 53º período de sesiones;

7. Decide continuar examinando esta cuestión en su 53º período de sesiones en relación con el tema 8 del programa titulado "Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión".

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/36. Cuestión de los derechos humanos y los
estados de excepción

La Comisión de Derechos Humanos,

Haciendo suya la resolución 1995/33 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de 24 de agosto de 1995,

Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el proyecto de resolución siguiente:

"El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1996/36 de la Comisión de Derechos Humanos, de 19 de abril de 1996, y la resolución 1995/33 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de 24 de agosto de 1995, titulada "Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción",

1. Aprueba la solicitud hecha por la Subcomisión al Relator Especial sobre la cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción, Sr. Leandro Despouy, para que desempeñe su mandato, en particular con respecto a i) la actualización de las listas de Estados que han proclamado, prorrogado o levantado un estado de excepción; ii) la presentación de conclusiones y recomendaciones acerca de los derechos inalienables durante los estados o situaciones de excepción; y iii) la continuación de sus consultas sobre el establecimiento de una

base de datos sobre los estados de excepción y las cuestiones conexas relativas a los derechos humanos;

2. Pide al Secretario General que facilite al Relator Especial los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de su mandato."

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/37. Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando su decisión 1991/107 de 5 de marzo de 1991, en la cual decidió examinar en su 48º período de sesiones el texto propuesto por el Gobierno de Costa Rica de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (E/CN.4/1991/66), destinado a establecer un sistema preventivo de visitas a los lugares de detención,

Recordando asimismo su resolución 1992/43 de 3 de marzo de 1992, en virtud de la cual creó un Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tomando como base para sus discusiones el proyecto propuesto por el Gobierno de Costa Rica, y decidió examinar la cuestión en su 49º período de sesiones,

Recordando además la resolución 1992/6 del Consejo Económico y Social de 20 de julio de 1992, por la cual el Consejo autorizó a un grupo de trabajo de composición abierta a reunirse durante dos semanas antes del 49º período de sesiones de la Comisión,

Recordando las resoluciones posteriores, en particular su resolución 1995/33 de 25 de julio de 1995, en las cuales autorizó al Grupo de Trabajo a celebrar nuevas reuniones para proseguir su tarea y presentar un informe a la Comisión,

Tomando nota de que los miembros del Grupo de Trabajo coincidieron en que los progresos logrados habían permitido finalizar la primera lectura del proyecto en el cuarto período de sesiones y que, si se seguía trabajando de la misma manera, cabía la posibilidad de elaborar, en un plazo razonable, un texto de gran valor en la esfera de la prevención de la tortura,

Recordando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirmó que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la prevención y pidió que se adoptara rápidamente un protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, destinado a establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención,

1. Toma nota del informe del Grupo de Trabajo sobre el proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (E/CN.4/1996/28) y acoge con beneplácito la conclusión de la primera lectura del proyecto realizada en su cuarto período de sesiones;

2. Pide al Grupo de Trabajo de composición abierta que se reúna durante dos semanas antes del 53º período de sesiones de la Comisión para continuar sus trabajos, incluido el comienzo de la segunda lectura sobre la base de los resultados de la primera lectura, que figuran en el documento E/CN.4/1996/28, así como del texto original (E/CN.4/1991/66), con miras a lograr rápidamente un texto definitivo y sustancial; la Comisión pide también al Grupo de Trabajo que le presente un nuevo informe;

3. Pide al Secretario General que transmita el informe del Grupo de Trabajo a los gobiernos, a los organismos especializados, a los presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, y que los invite a presentar sus observaciones al Grupo de Trabajo;

4. Pide asimismo al Secretario General que invite a los gobiernos, a los organismos especializados y a las organizaciones no gubernamentales, así como al Presidente del Comité contra la Tortura y al Relator Especial sobre la Tortura a participar en las actividades del Grupo de Trabajo;

5. Pide además al Secretario General que proporcione al Grupo de Trabajo todos los servicios necesarios para las reuniones que celebrará antes del 53º período de sesiones de la Comisión;

6. Decide examinar el informe del Grupo de Trabajo en su 53º período de sesiones en relación con el punto "Cuestión de un proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" del tema del programa titulado "Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión";

7. Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de resolución:

"El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1996/37 de la Comisión de Derechos Humanos, de 19 de abril de 1996,

1. Autoriza a un grupo de trabajo de composición abierta de la Comisión de Derechos Humanos a reunirse durante dos semanas antes del 53º período de sesiones de la Comisión con miras a continuar la elaboración del proyecto de protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

2. Pide al Secretario General que proporcione al Grupo de Trabajo todos los servicios necesarios para sus reuniones, y que transmita el informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1996/28) a los gobiernos, a los organismos especializados, a los presidentes de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas.

52ª sesión,

19 de abril de 1996.

[Aprobada sin votación. Véase cap. VIII.]

1996/38. Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un proyecto de declaración de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la Asamblea General de 23 de diciembre de 1994

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente la resolución 47/75 de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1992, y el párrafo 28 de la segunda parte de la Declaración y Programa de Acción de Viena,

Reafirmando su resolución 1995/32 de 3 de marzo de 1995, por la que establecía un grupo de trabajo abierto que se reuniría entre los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos con el fin exclusivo de elaborar

un proyecto de declaración, teniendo en cuenta el proyecto que figuraba en el anexo de la resolución 1994/45 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, titulado proyecto de "Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", para su examen y aprobación por la Asamblea General en el Decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo,

Reafirmando asimismo en particular que la invitación contenida en esa resolución estaba dirigida a las organizaciones de pueblos indígenas que habían solicitado autorización para participar en el grupo de trabajo,

Recordando la necesidad de que el Grupo de Trabajo examine todos los aspectos del proyecto de declaración, incluido su ámbito de aplicación,

Recordando asimismo la resolución 49/214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, por la cual la Asamblea alentaba a la Comisión a examinar el proyecto de declaración con la participación de representantes de los pueblos indígenas, sobre la base de los procedimientos apropiados que estableciera la Comisión y de conformidad con ellos,

Celebrando los progresos realizados en la redacción de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y subrayando la importancia y el carácter especial de dicho proyecto de declaración en calidad de instrumento destinado específicamente a promover los derechos de los pueblos indígenas,

Reconociendo que las organizaciones de pueblos indígenas tienen un conocimiento y una comprensión especiales de la actual situación de los pueblos indígenas del mundo y de sus necesidades en materia de derechos humanos,

1. Toma nota del informe del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1996/84) y celebra la forma positiva en que se han iniciado las deliberaciones del Grupo de Trabajo, en particular las medidas adoptadas para asegurar una aportación efectiva de las organizaciones de pueblos indígenas;

2. Expresa su reconocimiento por la labor realizada por el Consejo Económico y Social en el examen de las solicitudes presentadas por las organizaciones de pueblos indígenas para participar en el Grupo de Trabajo en virtud del procedimiento propuesto en el anexo a la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de marzo de 1995;

3. Acoge con beneplácito las decisiones en que el Consejo Económico y Social aprueba la participación de organizaciones de pueblos indígenas en la

labor del Grupo de Trabajo, e insta al Consejo a que tramite lo antes posible todas las solicitudes pendientes ateniéndose estrictamente a los procedimientos establecidos en el anexo de la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos;

4. Recomienda que el Grupo de Trabajo se reúna durante 10 días laborables antes del 53º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, cubriéndose los costos de la reunión con los recursos existentes;

5. Alienta a las organizaciones de pueblos indígenas que aún no se hayan registrado para participar en el Grupo de Trabajo y que deseen hacerlo a que soliciten la autorización de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo de la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos;

6. Pide al Grupo de Trabajo que presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la Comisión de Derechos Humanos en su 53º período de sesiones;

7. Decide examinar el informe del Grupo de Trabajo en su 53º período de sesiones en relación con el tema del programa titulado "Cuestiones indígenas";

8. Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de resolución:

"El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1996/38 de la Comisión de Derechos Humanos, de 19 de abril de 1996,

1. Autoriza al Grupo de Trabajo de composición abierta de la Comisión de Derechos Humanos que se reúne entre los períodos de sesiones, establecido de conformidad con la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos, a que se reúna durante un período de 10 días laborables antes del 53º período de sesiones de la Comisión, cubriéndose los costos de la reunión con los recursos existentes;

2. Pide al Secretario General que proporcione al Grupo de Trabajo todos los medios necesarios para sus reuniones, dentro de los recursos existentes en las Naciones Unidas."

52ª sesión,
19 de abril de 1996.

[Aprobada sin votación. Véase cap. XXIII.]

1996/39. Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, según se establece en su Carta, es la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Recordando sus anteriores resoluciones y las de la Asamblea General sobre el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo,

Recordando asimismo que la meta del Decenio es el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en cuestiones como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud, y que el tema del Decenio es "Los pueblos indígenas: la colaboración en acción",

Reconociendo la importancia de consultar a los pueblos indígenas y cooperar con ellos en la planificación y ejecución del programa de actividades para el Decenio, la necesidad de apoyo financiero suficiente de la comunidad internacional, incluido el apoyo de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y la necesidad de cauces adecuados de coordinación y comunicación,

Recordando la invitación dirigida por la Asamblea General a las organizaciones de pueblos indígenas y a otras organizaciones no gubernamentales a que consideraran las aportaciones que podrían hacer para contribuir al éxito del Decenio, con objeto de presentarlas al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas,

Tomando nota de la decisión 1992/255 del Consejo Económico y Social, de 20 de julio de 1992, en la que el Consejo pidió a los órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que velaran por que toda la asistencia técnica financiada o proporcionada por ellos fuera compatible con los instrumentos y normas internacionales aplicables a los pueblos indígenas y alentó los esfuerzos destinados a promover la coordinación en esa esfera y la mayor participación de los pueblos indígenas en la planificación y ejecución de los proyectos que les concernieran,

1. Afirma su reconocimiento del valor y diversidad de las culturas y formas de organización social de los pueblos indígenas y su convencimiento de que el desarrollo de éstos en sus propios países contribuirá al adelanto socioeconómico, cultural y ambiental de todos los países del mundo;
2. Toma nota del informe final del Secretario General sobre un programa amplio de acción para el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y de los anexos de dicho informe (A/50/511);
3. Acoge con satisfacción la decisión de la Asamblea General de aprobar el programa de actividades del Decenio que figura en el anexo de su resolución 50/157;
4. Toma nota de que el programa de actividades del Decenio puede ser revisado y actualizado en el curso del Decenio y que, a mediados del período, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General deberán examinar los resultados de las actividades a fin de determinar los obstáculos con que se tropieza para alcanzar las metas del Decenio y de recomendar formas de superarlos;
5. Acoge con satisfacción la afirmación de la Asamblea General de que uno de los objetivos principales del Decenio consiste en la aprobación de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas;
6. Acoge también con satisfacción el reconocimiento por la Asamblea General de que uno de los objetivos importantes del Decenio consiste en estudiar la posibilidad de crear un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas;
7. Reconoce la importancia de fortalecer la capacidad humana e institucional de los pueblos indígenas para que puedan encontrar soluciones propias a sus problemas y, para esos fines, invita al Coordinador del Decenio a recomendar medios apropiados de aplicar la recomendación de la Asamblea General de que la Universidad de las Naciones Unidas considere la posibilidad de patrocinar, en cada región, una o más instituciones de enseñanza superior como centros de excelencia y de difusión de conocimientos especializados;
8. Acoge con satisfacción las recomendaciones y peticiones contenidas en los párrafos 8, 9, 11, 13, 14 y 15 de la resolución 50/157 de la Asamblea General e invita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Coordinador del Decenio a que las apliquen con carácter prioritario dentro de los límites de los recursos existentes y que

suministren información oficiosa sobre las actividades emprendidas para el Decenio dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluido un examen de las actividades en 1995 y de las previstas para 1996, y que informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 53º período de sesiones en relación con el tema del programa titulado "Cuestiones indígenas";

9. Subraya el importante papel que la cooperación internacional desempeña en la aprobación de los objetivos y las actividades del Decenio y de los derechos, el bienestar y el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas;

10. Subraya también la importancia de la adopción de medidas en el plano nacional para lograr los objetivos y llevar a cabo las actividades relacionadas con el Decenio;

11. Alienta a los gobiernos a que apoyen el Decenio mediante la aportación de contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para el Decenio;

12. Alienta también a los gobiernos a que, según corresponda presten apoyo al Decenio mediante:

a) La preparación, en consulta con los pueblos indígenas, de programas, planes e informes relativos al Decenio;

b) La búsqueda, en consulta con los pueblos indígenas, de medios de dar a éstos más responsabilidad en cuanto a sus propios asuntos y una voz efectiva en la adopción de decisiones sobre cuestiones que les atañen;

c) El establecimiento de comités u otros mecanismos nacionales en que participen los pueblos indígenas para que los objetivos y actividades del Decenio se planifiquen y ejecuten sobre la base de una plena asociación con esos pueblos;

13. Alienta también a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aportar contribuciones, según corresponda, al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, para apoyar el logro de los objetivos del Decenio;

14. Acoge con satisfacción la creación por el Coordinador del Decenio de un órgano asesor que prestará orientación en relación con los proyectos y programas financiados por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para el Decenio;

15. Hace un llamamiento a los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que apoyen el Decenio destinando recursos a actividades que tengan por objeto alcanzar los objetivos del Decenio en colaboración con los pueblos indígenas;

16. Pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que al preparar actividades en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, preste la debida atención a la difusión de información sobre la situación, las culturas, los idiomas, los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas;

17. Alienta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Coordinador del Decenio a cooperar con el Departamento de Información Pública en la preparación y difusión de información sobre el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, teniendo debidamente en cuenta una representación precisa de la información relativa a los pueblos indígenas;

18. Toma nota de que la Asamblea General, en el párrafo 9 del anexo a su resolución 50/157, declaró que la observancia oficial del Decenio debería ser parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).

19. Decide examinar el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en su 53º período de sesiones, en relación con el tema del programa titulado "Cuestiones indígenas".

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XXIII.]

1996/40. Informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando la resolución 1982/34 del Consejo Económico y Social, de 7 de mayo de 1982, por la que el Consejo autorizó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a que estableciera anualmente un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, con el mandato de examinar

los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, prestando especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de los pueblos indígenas,

Recordando también su resolución 1988/44, de 8 de marzo de 1988, por la que instó al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a que intensificara sus esfuerzos por poner en práctica su plan de acción,

Tomando nota de la resolución 50/157 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995, en la cual la Asamblea aprobó el programa de actividades del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo,

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo sobre su 13º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1995/24),

Consciente de que, en diversas situaciones, los pueblos indígenas no pueden disfrutar de sus derechos humanos ni de sus libertades fundamentales inalienables,

Decidida a hacer todo lo posible para promover el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas,

Teniendo presente que deben elaborarse normas internacionales sobre la base de las diversas situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo,

1. Toma nota del informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías sobre su 47º período de sesiones (E/CN.4/1996/2-E/CN.4/Sub.2/1996/51);

2. Expresa su reconocimiento y su satisfacción al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión por la valiosa labor realizada;

3. Expresa asimismo su reconocimiento a los observadores que participaron en el 13º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, por su participación activa y constructiva en su labor;

4. Recomienda al Consejo Económico y Social que autorice al Grupo de Trabajo a celebrar reuniones durante cinco días laborables antes del 48º período de sesiones de la Subcomisión;

5. Invita al Grupo de Trabajo a que, en sus deliberaciones sobre los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tenga en cuenta la labor que, en el marco de sus

respectivos mandatos, realizan todos los relatores especiales, representantes especiales, expertos independientes, grupos de trabajo y seminarios de expertos sobre cuestiones temáticas en lo que respecta a la situación de los pueblos indígenas;

6. Insta al Grupo de Trabajo a que continúe su examen a fondo de los acontecimientos así como de las diversas situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo, y acoge con beneplácito la decisión del Grupo de Trabajo de subrayar en su 14º período de sesiones la cuestión de los pueblos indígenas y la salud, en relación con un punto del tema en el que se aborda el examen de los acontecimientos;

7. Toma nota de la recomendación del Grupo de Trabajo en el sentido de que se encomiende a la Presidenta-Relatora del Grupo la definición del concepto de pueblo indígena, toma nota de que en los trabajos a este respecto se deberán tener en cuenta las opiniones de gobiernos y de organizaciones de pueblos indígenas, y pide que el debate sobre esta cuestión se lleve a cabo en el 14º período de sesiones del Grupo de Trabajo en relación con el tema actual del programa sobre actividades normativas y que el informe del Grupo de Trabajo se transmita a los gobiernos y las organizaciones de pueblos indígenas antes de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, de la Comisión de Derechos Humanos establecido en la resolución 1995/32;

8. Invita al Grupo de Trabajo a que continúe examinando si existen medios por los que los pueblos indígenas puedan aportar una mayor contribución a la labor del Grupo de Trabajo;

9. Invita asimismo al Grupo de Trabajo a que incorpore en su labor futura el examen de las actividades internacionales emprendidas en el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y a que reciba información de los gobiernos en cuanto al logro de los objetivos del Decenio en sus respectivos países, de conformidad con lo señalado en el párrafo 16 del anexo a la resolución 50/157 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995;

10. Pide al Grupo de Trabajo que incorpore en el programa de su 14º período de sesiones la cuestión de cómo ha de contribuir al examen por el Secretario General de los mecanismos, procedimientos y programas existentes que guardan relación con los pueblos indígenas, suministrando a

este respecto información sobre el mandato y programa de trabajo actuales del Grupo de Trabajo;

11. Pide también al Secretario General que, dentro de los recursos existentes, facilite al Grupo de Trabajo los medios y la asistencia apropiados para el desempeño de su tarea, incluida la difusión suficiente de información acerca de las actividades del Grupo de Trabajo a los gobiernos, organismos especializados, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de pueblos indígenas, con el fin de alentar la participación más amplia posible en su labor;

12. Pide al Secretario General que, dentro de los recursos existentes:

a) Transmita lo antes posible los informes del Grupo de Trabajo a gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que formulen observaciones y sugerencias concretas;

b) Vele por que se faciliten a todas las reuniones del Grupo de Trabajo en su 14º período de sesiones los servicios de interpretación y la documentación correspondientes;

13. Expresa su gratitud y reconocimiento a los gobiernos y a las organizaciones que han hecho aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos Indígenas;

14. Hace un llamamiento a todos los gobiernos, organizaciones y particulares que estén en condiciones de hacerlo para que examinen las solicitudes de nuevas contribuciones al Fondo;

15. Alienta todas las iniciativas que adopten los gobiernos, las organizaciones de pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales para lograr la plena participación de los pueblos indígenas en actividades relacionadas con la labor del Grupo de Trabajo.

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XXIII.]

1996/41. Un foro permanente para los pueblos indígenas
en el sistema de las Naciones Unidas

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando las recomendaciones relativas a los pueblos indígenas incluidas en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en particular la recomendación de que se considere el establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas,

Recordando también las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el sentido de que se haga participar a los pueblos indígenas y sus comunidades en los programas de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, como se indica en el Principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el capítulo 26 del Programa 21,

Recordando además sus anteriores resoluciones 1994/28 de 4 de marzo de 1994 y 1995/30 de 3 de marzo de 1995, así como las resoluciones de la Asamblea General 49/214 de 23 de diciembre de 1994 y 50/157 de 21 de diciembre de 1995,

Tomando nota del informe titulado "Examen de un foro permanente para los pueblos indígenas, Informe del Seminario celebrado de conformidad con la resolución 1995/30 de la Comisión, Copenhague 26 a 28 de junio de 1995" (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7), de las observaciones recibidas al respecto por el Centro de Derechos Humanos, de las observaciones y sugerencias del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, que figuran en su informe a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (E/CN.4/Sub.2/1995/24), y de la resolución 1995/39, de 24 de agosto de 1995, titulada "Foro permanente para los pueblos indígenas en las Naciones Unidas", aprobada por la Subcomisión en su 47º período de sesiones,

Recordando que en el programa de actividades para el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, aprobado por la Asamblea General en su resolución 50/157, se reconoce como uno de los objetivos importantes del Decenio que se estudie la posibilidad de establecer un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas,

Reconociendo la importancia de que se haga participar a los pueblos indígenas y sus organizaciones en el examen del posible establecimiento de un foro permanente, y reconociendo el importante papel a este respecto del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas,

1. Hace suya la recomendación de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de que el Secretario General transmita el informe titulado "Examen de un foro permanente para los pueblos indígenas, Informe del Seminario celebrado de conformidad con la resolución 1995/30 de la Comisión, Copenhague, 26 a 28 de junio de 1995" (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7), así como las observaciones recibidas al respecto por el Centro de Derechos Humanos, a los gobiernos y a las organizaciones de pueblos indígenas invitándolos a que expresen su opinión sobre la cuestión del establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas y presente al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, en su 14º período de sesiones, un informe sobre las observaciones y sugerencias recibidas;

2. Pide al Secretario General que transmita a las organizaciones intergubernamentales interesadas el informe titulado "Examen de un foro permanente para los pueblos indígenas, Informe del Seminario celebrado de conformidad con la resolución 1995/30 de la Comisión, Copenhague, 26 a 28 de junio de 1995" y las observaciones recibidas al respecto por el Centro de Derechos Humanos;

3. Acoge con beneplácito la recomendación hecha al Secretario General por la Asamblea General en su resolución 50/157 de que recurriendo a los conocimientos especializados de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y de otros órganos competentes, examine, en estrecha consulta con los gobiernos y teniendo en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas, los mecanismos, procedimientos y programas existentes de las Naciones Unidas con respecto a los pueblos indígenas, y le presente un informe en su quincuagésimo primer período de sesiones;

4. Pide al Secretario General que, con cargo a los recursos existentes, vele por que se realice el examen a fin de que se ultime y distribuya a los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales interesadas y a las organizaciones de pueblos indígenas para que formulen sus observaciones con suficiente anterioridad al quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General;

5. Insta a los órganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas así como a las instituciones financieras que tienen a su cargo los mecanismos, procedimientos y programas existentes con respecto a los pueblos indígenas a que faciliten la plena y oportuna realización del examen que deberá llevar a cabo el Secretario General con arreglo a la resolución 50/157 de la Asamblea General;

6. Pide al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que en su 14º período de sesiones siga examinando con carácter prioritario el posible establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas y que, por conducto de la Subcomisión, presente sus observaciones y sugerencias a la Comisión en su 53º período de sesiones;

7. Pide, en particular, al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que incorpore en el programa de su 14º período de sesiones la cuestión de la propia contribución del Grupo de Trabajo al examen de los actuales mecanismos, procedimientos y programas que guardan relación con los pueblos indígenas, y pide al Secretario General que invite a los órganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas a que presenten por escrito información sobre sus contribuciones al examen que deberá llevar a cabo el Secretario General con arreglo a la resolución 50/157 de la Asamblea General;

8. Pide al Secretario General que transmita esta información al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas con anterioridad a su 14º período de sesiones;

9. Toma nota de la recomendación hecha a la Comisión de Derechos Humanos por la Asamblea General en su resolución 40/157 de que, sobre la base de la experiencia adquirida en el Seminario celebrado en Copenhague y de los resultados del examen que ha de realizar el Secretario General, estudie la posibilidad de celebrar un segundo seminario sobre el posible establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas, con la participación de expertos independientes, así como de representantes de gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y otras organizaciones no gubernamentales interesadas y de órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas;

10. Decide seguir examinando la cuestión de un segundo seminario en su 53º período de sesiones, en el marco de la continuación del examen por la Comisión del posible establecimiento de un foro permanente, en relación con el tema del programa titulado "Cuestiones indígenas";

11. Pide al Secretario General que facilite a la Comisión, en su 53º período de sesiones, un informe sobre las actividades emprendidas y la información recibida de conformidad con la presente resolución.

52ª sesión,
19 de abril de 1996.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XXIII.]